

PLN

**PARTIDO
LIBERACIÓN
NACIONAL**

**[“DISCURSOS”
Oscar Arias Sánchez]**

“DISCURSOS”

Oscar Arias Sánchez

- “Liberación Nacional es un partido reformista”
60 Aniversario del Partido Liberación Nacional
San José, 16 de octubre, 2011
- “Hoy, la esperanza del mundo tiene forma de rosa”
Consejo de la Internacional Socialista
25 de enero de 2012
- “Dos temas que debemos atender con cautela y urgencia:
La ingobernabilidad y la seguridad jurídica”
130 Aniversario del Colegio Abogados
10 agosto de 2011
- “Los parlamentos deben estar siempre al servicio
de las mejores causas de la humanidad”
XI Asamblea General Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA)
Quebec, 7 setiembre de 2011
- “Las armas están hechas para matar, y punto”
- “Otra América Latina es posible”
Citi Latin America Business Leaders Summit
Nueva York, 12 de mayo de 2011

LIBERACION NACIONAL ES UN PARTIDO REFORMISTA

60 Aniversario del Partido Liberación Nacional San José, 16 de octubre, 2011

Amigas y amigos liberacionistas, distinguidos invitados:

No doy serenatas, pero lo que hoy vengo a decirle al Partido Liberación Nacional me sale del corazón. No soy bueno envolviendo regalos, pero la verdad es que no hay papel que alcance para envolver el inmenso cariño que le tengo al Partido Liberación Nacional. No soy un gran fiestero, pero por nada del mundo me perdería la fiesta de los 60 años de nuestro partido. ¡Feliz aniversario amigos liberacionistas!

Todos debemos sentirnos agasajados en este día. El Partido Liberación Nacional no es sólo sus instalaciones, sus manifiestos y sus emblemas, sino sobre todo su gente. Somos nosotros, los miembros orgullosos de este partido político, los que cumplimos años. Esa es la razón por la que Liberación Nacional ha sido por más de 6 décadas el partido político más grande que nuestra tierra haya visto nacer: porque entre sus filas siempre ha contado con hombres y mujeres maravillosos. Con hombres y mujeres trabajadores. Con hombres y mujeres comprometidos con la democracia, la libertad y la justicia social. Con hombres y mujeres deseosos de construir una Costa Rica capaz de pensar en grande.

El aniversario de cualquier partido político conlleva siempre un significado profundo. A veces se nos olvida que los partidos políticos son la base de toda democracia. Si bien individualmente todos poseemos el derecho sagrado al voto, así como la libertad de optar por cargos públicos, lo cierto es que la democracia es siempre un ejercicio colectivo.

Que un partido pueda cumplir 60 años de continua actividad política, incluido el haber estado 9 veces en el gobierno, habla muy bien de la democracia costarricense. Son muy pocos los partidos políticos del mundo, y ciertamente ningún otro en Costa Rica, que alcanzan esta longevidad.

En nuestro país no sólo es posible fundar partidos políticos, sino que también es posible mantenerlos vivos hasta cuando sus militantes lo quieran; y no hasta cuando el gobernante de turno lo decida.

Nuestra libertad de asociación política es uno de los derechos más valiosos que nos regaló la Constitución de 1949, y nosotros, los liberacionistas, somos quienes mejor hemos honrado ese derecho.

Este 60 Aniversario no es sólo importante para el Partido Liberación Nacional, sino también para el sistema democrático costarricense. Este aniversario solo puede significar que Liberación Nacional interpreta muy bien el alma costarricense, que nuestro partido continúa siendo una caja de resonancia de las esperanzas de nuestro pueblo, que sigue siendo la mejor trinchera para pelear las batallas por el futuro de Costa Rica.

En este aniversario, sin embargo, no puedo dejar pasar la oportunidad de recordar también las batallas que el partido peleó en el pasado. Nació en esta casa la lucha por la pureza del sufragio y por las instituciones necesarias para garantizarla.

Nacieron aquí la abolición del ejército y una política exterior antibelicista, que nos valió el respeto y la admiración del mundo. Nacieron aquí grandes reformas en educación, vivienda y lucha contra la pobreza que hicieron de Costa Rica un país más solidario. Nacieron en esta casa las políticas que hicieron posible preservar la paz social y volver a la senda del progreso, tras las graves crisis económicas de los años 1980 a 1982 y 2008 a 2010.

Nacieron aquí las decisiones que nos permitieron integrarnos al mundo, ser el primer país exportador per cápita de productos de alta tecnología de América Latina, y atraer inversiones millonarias del más alto nivel. Esa es la obra reformista de Liberación Nacional, de la que me siento orgulloso, y de la que nunca, nunca, renegaré.

Y no lo haré, porque esa es precisamente la razón que nos permite celebrar hoy: Liberación Nacional no es un partido dogmático; Liberación Nacional es, ante todo, un partido reformista.

Nuestro partido jamás hubiera podido cumplir 60 años, de no ser porque ha venido adaptándose con los tiempos. De no ser porque ha venido abriendo caminos que otros partidos temieron abrir. De no ser porque ha sabido leer la Costa Rica y el mundo del siglo XXI. De no ser porque ha aceptado el cambio como un principio elemental. Somos conscientes de que las políticas de los años 50 resultaron ser exitosas en su momento, pero que en el 2011 no lo serán en medio de un mundo que ha cambiado y nos exige a nosotros cambiar. Como la letra de aquella hermosa canción de Julio Numhauser que nos cantaba Mercedes Sosa, cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Y así cambió Costa Rica. Cambiaron nuestras instituciones. Cambiamos nosotros. Cambiaron nuestras aspiraciones. Nos guste o no. El cambio y los principios son lo único que no cambia, la socialdemocracia moderna así lo ha comprendido. Una social democracia moderna, tal y como la definimos cuando ustedes me honraron haciéndome candidato por segunda vez, es la que contra todo tipo de obstáculos, puso a Costa Rica a caminar de nuevo. Una socialdemocracia moderna que cree en el potencial competitivo de nuestro país y en su capacidad para ocupar un sitio privilegiado en el mapa económico mundial.

Una socialdemocracia moderna que, a pesar de su corta edad y de quienes la han criticado, le devolvió la esperanza a los costarricenses. Una socialdemocracia moderna que cree que el gasto público debe dirigirse prioritariamente a la inversión social, atendiendo las necesidades de los más débiles y más pobres.

Al igual que otros partidos socialdemócratas en América Latina y en Europa, los liberacionistas renovamos nuestra ideología. Decidimos voluntariamente actualizar nuestro partido, antes que dejar que la historia lo hiciera por nosotros.

En pocas palabras, dejamos de tenerle miedo al cambio. Nos atrevimos a soñar en grande. Nuestra socialdemocracia moderna levantó a Costa Rica de su desidia, le fijó un rumbo y la impulsó a abandonar la madriguera del temor y de la apatía para navegar en el mar abierto de la esperanza.

Nuestra socialdemocracia moderna es el signo de la verdadera grandeza de Liberación Nacional: su vocación de pensar y actuar como gobierno. Su vocación de ser el partido natural de gobierno en Costa Rica.

Nuestra misión, como liberacionistas, es preservar esa vocación. Es seguir caminando el camino que nosotros mismos, desde el partido, hemos construido. Es continuar profundizando las obras reformistas de los gobiernos liberacionistas.

Parafraseando a Emmanuel Kant: “en temas de política y de economía, si los costarricenses no avanzamos, retrocedemos”. Si no hay un horizonte de realización material y espiritual se retrocede, si la mezquindad y el corto plazo sustituyen a la visión y a los ideales, se retrocede. Y si lo que existe es retroceso Liberación Nacional y el pueblo de Costa Rica deben retomar y profundizar las transformaciones que lleven bienestar, progreso y modernidad.

Por ello es necesario continuar avanzando en la modernización de Costa Rica, postulado básico de la nueva socialdemocracia moderna. Como lo dije hace un año durante la celebración del 59 Aniversario del Partido:

“La socialdemocracia es una inspiración, no un manual; es una brújula, no una camisa de fuerza. La socialdemocracia que yo defiendo y quiero es la misma de don Pepe: “un sistema económico que produzca con eficiencia y distribuya con justicia”.

Una socialdemocracia que defienda la presencia de un Estado vigoroso, pero también dispuesta a admitir que, por gloriosos que hayan sido algunos logros de la actividad estatal en Costa Rica y más allá, ningún principio socialdemócrata es suficiente para justificar toda intervención estatal como intrínsecamente virtuosa y justa. Con frecuencia, lo que se había entendido por socialdemocracia no era más que una defensa sin cortapisas de un estatismo paralizante y hasta antidemocrático.

Ya hemos visto muchos casos en que el dominio estatal de la prestación de un servicio no es otra cosa que una coartada para esconder su control por parte de

grupos, gremios e intereses minoritarios y mezquinos, que muy poco tienen que ver con los del pueblo costarricense. Es preciso que entendamos que control estatal no es lo mismo que regulación estatal, y que control burocrático no es lo mismo que control democrático.”

En mi pasada Administración no lo pudimos hacer todo para convertir a Costa Rica un país más moderno, pero hicimos lo que pudimos y lo que teníamos que hacer. Entre muchas otras cosas, aprobamos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, abrimos los monopolios en seguros y en telecomunicaciones, y negociamos nuevos tratados comerciales con la Unión Europea, con China y con Singapur. Negociamos la concesión para darle a Limón un puerto de primer mundo, y presentamos proyectos de ley para modernizar y poner a derecho nuestras Zonas Francas, así como para incentivar la inversión, tanto pública como privada, en el sector de energía eléctrica. No debemos echar marcha atrás en estos proyectos.

No podemos dejar que se detengan, ni mucho menos permitir que se reviertan. Me preocupa que haya gremios empeñados en traerse abajo todo este esfuerzo. Me preocupa que haya diputados que le crean a los sindicatos, cuando dicen que nuestro país no necesita de la inversión privada para satisfacer la demanda actual y futura de energía, sobre todo si queremos aumentar nuestra productividad y competitividad.

Me preocupa que en este país sea tan fácil impugnar una concesión, y que cualquier ocurrencia sea suficiente para atrasar inversiones millonarias que Costa Rica necesita con urgencia, particularmente en provincias costeras. Me preocupa la inseguridad jurídica y los mensajes contradictorios que, permanentemente, estamos enviando a nuestros empresarios y a nuestros inversionistas.

Parece mentira que algunos políticos y grupos de presión sigan viviendo, a estas alturas, en el pasado. Creo que la explicación de esa actitud es sencilla: como nos dice Juan Enríquez, “el futuro puede, en efecto, ser muy intimidante para los conservadores del status quo”. Pero lo cierto es que el futuro nos alcanzó. No nos queda más que lidiar con los cambios que trae nuestra era y adaptarnos a ellos, sacando el mayor provecho posible.

Nada hacemos con darle la espalda al mundo, porque es en el mundo en donde está aquello que tan profundamente anhelamos: un mayor desarrollo para Costa Rica. Parafraseando al gran Víctor Hugo “El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los desorientados es lo confuso, para los temerosos y calculadores, es lo desconocido; para nosotros, en cambio, costarricenses y liberacionistas del siglo XXI, es la oportunidad de crecer y realizar nuestros sueños, la oportunidad de acabar con la injusticia y con la miseria”. Como bien lo pensaba nuestro poeta Jorge Debravo, el futuro es la oportunidad de “que todos tengan pan, y techo, y salud, y educación, como se tiene el aire”.

Y digo que pensemos no sólo en la Costa Rica del futuro, sino también en los gobiernos del futuro, porque una de las mayores preocupaciones de un partido político debe ser siempre la calidad de la convivencia democrática. Los signos de ingobernabilidad y de erosión de la legitimidad de nuestras instituciones políticas, visibles desde hace mucho tiempo, se han convertido hoy en algo mucho más serio. De ser la democracia más consolidada de América Latina, hemos pasado a tener un sistema político con partidos improvisados, con menguada participación popular, atiborrado de denuncias penales, atado por tecnicismos burocráticos y con casi nula capacidad para llegar a acuerdos.

Mejorar nuestra gobernabilidad, conlleva reafirmar el poder democrático de quienes fueron electos para gobernar. Hoy tienen más poder en Costa Rica las cúpulas sindicales y algunos burócratas, que los representantes democráticamente electos por el pueblo. Como partido político, debemos tener mucho cuidado con que las decisiones políticas pasen a un segundo plano, en nombre de un objetivismo o tecnicismo poco legítimo. Debemos discutir, con sana preocupación, sobre el poder que tienen en este país unos pocos para imponer sus intereses a las mayorías.

Me decía hace unas semanas en Ottawa, Canadá, un alto funcionario del servicio exterior, sobre el servicio civil de su país: “si el gobierno decide que el mundo es plano, los burócratas, o están de acuerdo, o renuncian”. Ese servicio civil no es sólo el que tiene actualmente Canadá con Harper, sino también el que tuvo antes con Trudeau.

Es el servicio civil que tiene actualmente Alemania con Merkel, y el que tuvo antes con Schroeder. Es el servicio civil que tiene actualmente el Reino Unido con Cameron, y el que tuvo antes con Blair. Es el servicio civil que tiene actualmente Estados Unidos con Obama, y el que tuvo antes con Bush. En Costa Rica, por el contrario, los mandos medios de nuestra burocracia deciden con cuál gobierno simpatizar y con cuál no, lo que tiene consecuencias profundas para la gobernabilidad.

En muchos sectores gremiales y grupos de presión hay miedo al cambio, y mucho egoísmo. Hay egoísmo en algunos sectores empresariales del país, ciegos ante las desigualdades, desentendidos del tejido social, reacios a entender que si no creamos un sistema tributario progresivo, recogeremos una amarga cosecha de injusticia, exclusión y violencia.

Hay egoísmo en algunos sectores sindicales que, refugiados en un discurso anacrónico y antidemocrático, están dispuestos a incendiar el país e impedir toda reforma económica, con tal de preservar sus privilegios y su derecho de llave sobre instituciones que no les pertenecen a ellos, sino a todos los costarricenses. Hay egoísmo en algunos partidos políticos que, incapaces de asumir su condición de minoría, han preferido secuestrar la democracia para mantener la vigencia política de sus pequeñas parcelas electorales.

La tierra prometida que nos propone la vieja izquierda populista y la más reciente tendencia neo-estatista, anquilosada en algunos grupos y políticos del país, no es otra que la tierra prometida del ayer. Es ese viejo estatismo que insiste en dar la espalda a la integración económica, en regresar al proteccionismo comercial, en menospreciar la inversión extranjera, y en hacer depender el progreso tecnológico del país de las inversiones que pueda realizar el Estado, pese a que todas esas posiciones constituyen, hoy por hoy, la vía más segura para condenar a Costa Rica al subdesarrollo.

Es en la vieja izquierda populista y en ese estatismo de nuevo cuño donde se sigue pensando que en el mundo, para ser progresista, hay que preservar los monopolios estatales, aunque se hayan convertido en cuellos de botella para nuestro desarrollo económico. Es ahí donde continúan defendiendo sin cortapisas un estatismo paralizante; y suponen, como un artículo de fe, que el control estatal de los medios de producción es equivalente a su control por parte de los ciudadanos. Estos grupos políticos prefieren volver la espalda a la historia antes que asumir el reto de nuestro tiempo, continúan negando la globalización y considerando la adaptación a ella como una inaceptable felonía y una traición a la patria. Para nosotros, liberacionistas y costarricenses del siglo XXI, el pasado es el punto de partida que nos permite conquistar el porvenir.

Pero también la extrema derecha nos tiene atados al pasado. Porque si no es progresista pretender volver a 1970 como la vieja izquierda y el neo-estatismo sugieren, mucho más reaccionario aún es pretender regresar al siglo XIX, que es lo que nos propone la extrema derecha liberal. La que ha asumido el “sálvese quien pueda” como filosofía política; que no cree en el valor de la igualdad, ni en el compromiso de que la sociedad asegure a todos los ciudadanos un nivel de vida compatible con su dignidad humana. Es la extrema derecha que no cree que quienes disfrutan de lo superfluo tienen la obligación de contribuir al bienestar económico de quienes carecen de lo esencial; que aspira a que Costa Rica tenga la carga tributaria de Guatemala, aunque eso signifique condenar inexorablemente a nuestros servicios públicos al colapso. Es la extrema derecha que piensa que la pobreza se resuelve con caridad, y no con mecanismos de solidaridad social articulados por el Estado, como la Caja Costarricense de Seguro Social y el Programa Avancemos. Es la extrema derecha que sueña con mutilar las capacidades del Estado, inclusive aquellas necesarias para llevar a cabo funciones

como la redistribución de la riqueza, el combate a la pobreza, la lucha contra la desigualdad social y la inversión en desarrollo humano, que el mercado difícilmente puede realizar y que resultan decisivas para el futuro de cualquier país. Ni la vieja izquierda, ni el estatismo de nuevo cuño, ni la extrema derecha, podrán construir el país con que los costarricenses soñamos. La esperanza, entonces, está puesta en un partido moderado y reformista como Liberación

Nacional, fiel a los principios y por eso siempre actual, siempre moderno y progresista.

Tras muchos años de vagar sin rumbo, finalmente, en mi gobierno, nos atrevimos a tomar decisiones. Costa Rica tiene entre sus manos, hoy más que nunca, la posibilidad de convertirse en una nación desarrollada, pero esa posibilidad depende de que sea capaz de construir y mantener una cultura política desarrollada. Una forma más madura de entender el proceso democrático, que se caracterice por la altura de miras, por la claridad intelectual de los programas de gobierno, y por la persecución de un fin común a la hora de ejecutar los grandes proyectos que el país urgentemente requiere.

Por esa razón, celebro que en las últimas semanas hayamos sido testigos de una negociación valiosa: El acuerdo político para aprobar, por la vía rápida, una reforma tributaria. Los intereses extremos de algunos partidos liberales en este país le han negado a los costarricenses una reforma fiscal solidaria y moderna. Llevamos dos administraciones, incluida la mía, sin que logremos conseguir una reforma tributaria por la oposición permanente de un partido político que no cree en impuestos.

Sumado a esto, está el anacrónico Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa, que le permite a ese único partido, o a cualquier diputado, imponer su negativa para mejorar la Hacienda Pública.

Siempre hablé, durante mi pasada campaña política, de la necesidad de hacer una reforma tributaria para poder agregar 2 o 3 puntos del PIB. Sin embargo, un partido político me dijo, al inicio de mi Administración, que ni siquiera intentara presentarla, ya que no me iban a permitir pasarla. Por esa razón, como ciudadano y como liberacionista, celebro la posibilidad de que a finales de año podamos contar con una reforma tributaria.

Siempre he dicho que en una negociación uno obtiene lo que puede y no lo que quiere. Sé que es prácticamente imposible para el gobierno lograr que se apruebe la reforma fiscal sin ceder en algunos temas. Ahora bien, uno de los temas que debe discutirse con mayor cuidado, y que no debe aprobarse, son los impuestos adicionales a las empresas instaladas en las Zonas Francas del país. Este es un punto del proyecto que no puede verse, únicamente, en términos de lo que el Estado puede dejar de percibir. Lo cierto es que por cada dólar que el Estado sacrifica en estos regímenes preferenciales, obtiene, de las Zonas Francas, \$8 dólares. La inversión que las empresas extranjeras han hecho a lo largo de la última década desde las Zonas Francas ha sido crucial para modernizar e impulsar nuestra economía, aún en medio de crisis financieras internacionales.

Si bien nuestra producción es sostenida en mayor medida por las pequeñas y medianas empresas nacionales, lo cierto es que el encadenamiento de la industria

nacional con las empresas extranjeras es esencial en términos de transacciones comerciales y de transferencia tecnológica y de conocimientos.

Hoy, es prácticamente imposible desligar la industria nacional de la industria extranjera. Más importante aún, es tener en cuenta lo que las empresas ubicadas en las Zonas Francas de nuestro país representan en términos de empleo. Mientras que los países desarrollados viven la tragedia del desempleo, con 44 millones de personas desempleadas, en nuestro país las empresas ubicadas en las Zonas Francas contratan a casi 60 mil personas directamente, y por cada una de esas personas hay tres más que se benefician indirectamente. Se trata, además, de empleos de altísima calidad y bien remunerados. Los empleados en las Zonas Francas generan un salario promedio mensual de \$1.028 dólares por trabajador, suma que es 1,6 veces mayor que el salario promedio nacional pagado en el sector privado del país.

Muchas empresas en las Zonas Francas son las que están contratando a nuestros jóvenes recién graduados de las universidades. Es cierto que necesitamos impuestos para mejorar nuestra educación, pero también es cierto que a quienes ya les ayudamos a poder terminar una carrera universitaria, debemos también ayudarles en su derecho a obtener un empleo digno, y son las empresas de las Zonas Francas las que frecuentemente están contratando jóvenes costarricenses. Solo en el año 2010, el 37% del nuevo empleo en el sector privado fue generado por empresas ubicadas en las Zonas Francas. Mi preocupación fundamental son nuestros jóvenes.

Nuestros estudiantes del Instituto Tecnológico, de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, de la Universidad Técnica de Alajuela y de las universidades privadas del país. No tiene ningún sentido educar a nuestros jóvenes, si al final de su carrera deben abandonar Costa Rica, para buscar en otros países los empleos de calidad que aquí les negamos. Siempre lo he dicho: O exportamos bienes y servicios, o exportamos personas y cerebros.

Como es frecuente en nuestro país, esta discusión ha estado rodeada de una serie de mitos y falsos argumentos. Se ha dicho que este tipo de regímenes en Costa Rica son contrarios a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, algo que no es cierto, pues nuestro país ya se puso a derecho en mi gobierno, con la aprobación por unanimidad de una ley que reformó las Zonas Francas. Se ha dicho que en otros países estas empresas pagan impuestos y que no por ello se han ido, como si las condiciones de Costa Rica no fueran distintas, y como si no tuviéramos que competir con naciones como Vietnam, Malasia, Chile, Singapur, China e India, entre otras, donde empresas como las que se han asentado en nuestro país reciben una enorme cantidad de beneficios adicionales. Argumentar que no todas las empresas de las Zonas Francas del país se van a ir por la imposición de esos impuestos, es contar la mitad de la historia. El problema no es sólo las empresas que se puedan ir, sino también las que dejan de llegar.

No podemos seguir enviando al mundo señales de inseguridad jurídica. Nos enorgullecemos de ser un Estado de Derecho, pero defender ese ideal pasa por ser congruentes con nuestras políticas y leyes. El Estado debe otorgarle a los empresarios, nacionales y extranjeros, la certeza de que hay claridad en las reglas del juego para hacer negocios. Hace tan sólo 20 meses, en mi gobierno, aprobamos por unanimidad de las fracciones legislativas una reforma a la Ley de Zonas Francas, y hoy se promueve una reforma en otro sentido.

La ley con que contamos actualmente ya fija un régimen impositivo que incluye el pago del impuesto sobre la renta y nuevos incentivos para que las zonas rurales también se beneficien de esta inversión. Después de un cuidadoso análisis comparativo sobre los estímulos a la inversión extranjera que ofrecen otras naciones, nuestra Asamblea Legislativa aprobó el actual régimen de Zonas Francas pensado para operar durante 20 años... no durante 20 meses.

Como lo dije en aquella oportunidad en que sancioné la actual ley de Zonas Francas: "Salvo algunos ideólogos del siglo pasado, los expertos aseguran que el país no debe cambiar un modelo de desarrollo que hasta ahora le ha rendido excelentes resultados." Es vital para el país aprobar la reforma fiscal, y espero que así ocurra en las próximas semanas, pero también es imprescindible explorar todas las vías de la negociación y la flexibilidad políticas. Como lo he dicho desde hace 40 años, se requiere más valor para coincidir que para discrepar.

Por el bien de Costa Rica, espero que los distintos actores, con posiciones divergentes en este tema, puedan transigir y arribar a un acuerdo satisfactorio. Confío en que la negociación y el diálogo corrijan esa equivocada señal de incertidumbre e inseguridad jurídica. Todo el ser de la patria, y lo mejor de nuestros anhelos y pensamientos, deben estar centrados en un porvenir donde el crecimiento económico y la creación de empleos bien remunerados sean la vía para llevar justicia y solidaridad a las familias costarricenses.

Amigas y amigos:

No hay duda de que Costa Rica tiene delante de sí oportunidades extraordinarias. Las tareas que habremos de emprender requerirán del esfuerzo, del talento y del sacrificio de todos los costarricenses. No son tareas que emprendamos con la ingenuidad de quien piensa que todo será simple, sino con la esperanza madura y certera de un pueblo que conoce su propio talento y la raíz profunda de sus valores. Pero son tareas que requieren que hombres y mujeres extraordinarios asuman ese gran sacrificio personal que es la función pública bien entendida, y es nuestro deseo que esos hombres y mujeres provengan del Partido Liberación Nacional.

Hombres y mujeres de sólida formación y de pensamiento profundo. Hombres y mujeres capaces de navegar con el pulso firme y la mirada serena en las turbulentas aguas de nuestro mundo globalizado, interdependiente y conflictivo.

Hombres y mujeres cuya vocación de servicio a los demás no admita duda y cuya integridad sea el pilar fundamental sobre el cual han construido sus vidas y sus carreras. Hombres y mujeres que sean testimonio fiel de concordancia entre lo que se dice y lo que se hace. Hombres y mujeres cuyo coraje e imaginación se renueven cada día. Hombres y mujeres que reflejen lo grande de la política y el más firme compromiso de diseñar un mejor futuro para todos los costarricenses. Hombres y mujeres liberacionistas.

Como nación, y como partido, podemos gastarnos los años gritándole al viento por soplar en la dirección contraria a la posición de nuestras velas, o podemos acomodar las velas y aprovechar el viento. No existe nada extraordinario en esto. Por el contrario, lo ilógico es pretender negar el curso de las cosas.

El Partido Liberación Nacional acomodó sus velas y aprovechó el viento, y por eso hoy cumple 60 años. A los hombres y mujeres liberacionistas, a los aquí presentes y a los venideros, debemos dedicar y encargar este aniversario. Quienes tomaron las riendas del Partido, y quienes las tomarán, pueden sentirse muy orgullosos, pero tienen también ante sí una enorme responsabilidad: permitir que Liberación Nacional cumpla, por lo menos, 60 años más. De permitir que Liberación Nacional vuelva a ganar las elecciones en el año 2014.

Gracias compañeros, por seguir recordando que durante estas 6 décadas no hemos sido un partido perfecto, sino uno colmado de sueños, dispuesto a levantarse, dispuesto a superarse, dispuesto a enfrentarse a los molinos viejos y nuevos que la vida nos presenta. Un partido dispuesto a nunca dejar de alumbrar con la luz de su propia estrella.

Muchas gracias y muchas felicidades.

HOY, LA ESPERANZA DEL MUNDO TIENE FORMA DE ROSA.
Consejo de la Internacional Socialista
25 de enero de 2012

Bienvenidos a esta pequeña república de América, en la que cuatro millones y medio de habitantes soñamos todos los días con un futuro a la altura de nuestras capacidades; en la que ha sido posible la quimera de una sociedad sin ejército, y en la que pronto celebraremos ciento veintitrés años de democracia. Bienvenidos a esta pequeña república de América, que durante la segunda mitad del siglo XX atestiguó el desfile de las más abominables dictaduras a su alrededor, sin ser ella nunca escenario para la opresión; que se negó a ser alfil en el ajedrez de la Guerra Fría, y que durante el conflicto militar centroamericano sus únicas armas fueron la diplomacia y el diálogo, incluido el Plan de Paz que presenté, con el fin de evitar que en Centroamérica siguiera matándose los hermanos. Bienvenidos a Costa Rica.

Este Consejo de la Internacional Socialista reúne a líderes y dirigentes políticos de Asia, África y especialmente de Europa y de América Latina; dos regiones del mundo donde la rosa de la socialdemocracia ha germinado, por muchísimas décadas, con particular fuerza e insistencia. Con la franqueza que debe prevalecer entre los amigos, hemos de reconocer que la génesis de nuestra historia común es la dominación de una civilización por la otra. América Latina conoció a Europa por su fuerza, antes que por sus ideas. El temor caracterizó la conquista, la indignación la colonia. Y sin embargo, no pudimos dejar de admirar a esa gran cultura. A pesar de las luchas que nos enfrentaron, es innegable que Europa encendió la luz de la razón en nuestra tierra, y que nos infundió el apego a las mejores causas de la humanidad, entre ellas la socialdemocracia. Una causa que no abandonamos con la Independencia.

Aún así, la socialdemocracia en América Latina ha tenido que lidiar con toda suerte de experimentos y ocurrencias ideológicas. Algunas más peligrosas que otras para los ideales de democracia, justicia y libertad, así como para el crecimiento económico de nuestra región. Hoy, muchos países latinoamericanos han dejado de comprender la urgencia de preservar el Estado de Derecho y, en especial, la seguridad de las personas y los bienes, sin la cual no hay competitividad, ni democracia, ni paz. Los latinoamericanos a veces somos como un grupo de niños haciendo castillos de arena al borde del mar.

Construimos maravillas mientras la marea está baja, y con orgullo infantil admiramos la obra realizada. Pero al venir la pleamar, vemos desaparecer lo que construimos, y una vez más lloramos la pérdida de nuestra libertad, de nuestra legalidad o de nuestra paz.

Es doloroso admitirlo, pero en nuestro continente aún hay países donde ningún logro parece ser definitivo.

Hasta hace pocos años, se pensaba que el desarrollo económico y social era posible en un pobre entorno institucional. Pero las ficciones de la teoría tuvieron que ceder ante el peso abrumador de la experiencia. Hoy se reconoce universalmente que el desarrollo es imposible sin un desempeño institucional adecuado, lo que empieza por la simple práctica de la democracia. Eso quiere decir, desde luego, un gobierno democráticamente electo, representativo y participativo. Pero también un gobierno donde los poderes del Estado sean independientes entre ellos y garanticen un delicado juego de pesos y contrapesos; algo que Montesquieu justificó magistralmente, pero que algunos políticos de la región prefieren ignorar. Una de las grandes falacias políticas en América Latina, consiste en vender la idea de que cada lugar puede desarrollar una democracia específica o un sistema de libertades particular.

Muy a menudo, esas justificaciones no son más que disfraces para ocultar una vocación opresiva o autoritaria. Yo estoy plenamente convencido de que las reglas democráticas son universales y que los países son más o menos democráticos, dependiendo de cuánto se acercan o cuánto se alejan de ese sistema que esbozaron los griegos, verdaderos estadistas y hermanos de cuna de nuestro distinguido invitado George Papandreu, de ese sistema que perfeccionaron los estadounidenses, que sofisticaron los nórdicos y que hoy intentamos impulsar, con mayor o menor éxito, tantos países de la Tierra.

El poder democrático es siempre un poder limitado. Por definición, un gobernante demócrata tiene oposición política, es controlado por los medios de comunicación, recibe críticas por parte de grupos de presión, es supervisado por el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tiene un periodo fijado para ejercer sus funciones, tiene un marco legal definido en el que debe operar, y se encuentra siempre sujeto al escrutinio ciudadano y a la evaluación pública de su gestión. En nuestros regímenes presidencialistas, la práctica democrática debería ser reconocer el carácter orientador del Poder Ejecutivo, garantizar la independencia del parlamento para legislar y controlar, y librar a la justicia de presiones e intereses políticos. Éstas son las reglas incuestionables del poder democrático, y cualquiera que pretenda saltarlas incurre en vicios autoritarios, aunque haya sido elegido por el pueblo. Sin embargo, algunos gobiernos latinoamericanos han caído en la trampa de creer que al recibir el apoyo electoral, el mandato del pueblo les permite modificar esas reglas para llevar adelante su proyecto político. Tengamos mucho cuidado.

Las elecciones son una parte esencial del proceso democrático, pero no son el proceso democrático. Si un gobernante coarta las garantías individuales, limita la libertad de expresión, y restringe injustificadamente la libertad de comercio, subvierte las bases de la democracia que lo hizo llegar al poder.

El dilema que esto presenta, y que aún no hemos logrado resolver, es cómo lidiar con democracias en donde los gobernantes se comportan autoritariamente, pero no son

dictaduras. Porque, en honor a la verdad, en América Latina sólo existe una dictadura: la dictadura cubana. Los demás regímenes, nos guste o no, son democracias en mayor o menor grado de consolidación o deterioro.

Pretender derrocar esos gobiernos, o removerlos de alguna forma violenta o contraria a la Constitución y las leyes, es caer en el mismo juego autocrático que pretendemos combatir. Los pueblos mismos deben aprender a apartar los espejismos de la demagogia y del populismo, porque el problema no son los falsos Mesías, sino los pueblos que acuden con palmas a celebrar su llegada.

Uno de los más elocuentes casos del desprecio por el Estado de Derecho y la erosión de las instituciones democráticas es Nicaragua.

Con la reelección de Daniel Ortega como Presidente en el año 2006, empezaron nuevamente a desaparecer en ese país los controles al ejercicio del poder público y se difuminaron los límites de ese poder sobre el ejercicio de las libertades individuales de los nicaragüenses. Este deterioro fue más visible aún en el fraude de las elecciones municipales del 2008 y en las recientes elecciones presidenciales.

De nada le sirve a América Latina deshacerse de líderes con delirios autoritarios, tan sólo para ser sustituidos por nuevas estrellas del teatro político. A pesar de que nuestros pueblos vencieron con valentía las dictaduras que marcaron con sangre la segunda mitad del siglo XX, aún queda mucho camino por recorrer si la democracia ha de asentarse para siempre en la región. Parafraseando a Octavio Paz: en nuestra región la democracia no necesita echar alas, lo que necesita es echar raíces. Para que la democracia eche raíces hay que hacer mucho más que promulgar constituciones políticas, firmar cartas democráticas o celebrar elecciones periódicas. Echar raíces quiere decir construir una institucionalidad confiable, más allá de las anémicas estructuras que actualmente sostienen nuestros aparatos estatales.

Quiere decir garantizar la supremacía de la ley y la vigencia del Estado de Derecho. Quiere decir fortalecer el sistema de pesos y contrapesos. Quiere decir asegurar el disfrute de un núcleo duro de derechos y garantías fundamentales. Y quiere decir, antes que nada, la utilización del poder político para lograr un mayor desarrollo humano, el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros habitantes y la expansión de las libertades de nuestros ciudadanos.

Ese, y no otro, es el principal objetivo de todo gobierno socialdemócrata: dar contenido económico, político y sobre todo social, a la democracia. Un verdadero demócrata, si no tiene oposición, la crea. Demuestra su éxito en los frutos de su trabajo, y no en el producto de sus represalias. Demuestra su poder abriendo hospitales, caminos y universidades, y no coartando la libertad de expresión y opinión.

Un verdadero demócrata demuestra su energía combatiendo la pobreza, la ignorancia y la inseguridad ciudadana, y no imperios extranjeros, conspiraciones secretas e invasiones imaginarias. Esta región, cansada de promesas huecas y de palabras vacías, necesita una legión de estadistas cada vez más tolerantes, y no una legión de gobernantes cada vez más autoritarios.

Es muy fácil defender los derechos de quienes piensan igual que nosotros. Defender los derechos de quienes piensan distinto, ése es el reto del verdadero demócrata. Ojalá nuestros pueblos tengan la sabiduría para elegir gobernantes a quienes no les quede grande la camisa democrática. Ojalá algunos gobernantes entiendan que para tener un gobierno de corte socialista, conservador, liberal, o con cualquier otro énfasis ideológico, primero hay que tener una democracia.

Debemos estar claros en que la única vía para restarle poder a quienes lo han concentrado luego de recibir el apoyo popular, es minando ese apoyo popular con educación cívica, con oportunidades y con ideas. Desafortunadamente, en esas tareas seguimos fallando. Seguimos posponiendo eternamente las grandes reformas políticas, educativas y tributarias que por años hemos prometido hacer.

Ni el colonialismo español, ni la falta de recursos naturales, ni la hegemonía de Estados Unidos, ni ninguna otra teoría producto de la victimización eterna de América Latina, explican el hecho de que nos rehusamos a aumentar nuestro gasto en innovación, a cobrarle impuestos a los ricos, a graduar profesionales en ingenierías y ciencias exactas, a promover la competencia, a construir la infraestructura que no hemos construido en los últimos 200 años, o a brindar seguridad jurídica a los empresarios e inversionistas.

Por más que amo a esta región, y por más que quisiera ser ciego ante sus defectos, no puedo evitar pensar que no estamos haciendo bien las cosas. Que caminamos a tientas en el curso de la historia, que nuestra América Latina seguirá siendo una promesa, en la medida en que no asuma con seriedad su propia tarea. Esta es la región que siempre deja todo para el próximo gobierno, la próxima generación, o el próximo siglo... aunque en Costa Rica, en esto parece que le estamos ganando a nuestros vecinos: aquí no estamos dejando todo para el próximo gobierno, para la próxima generación, o para el próximo siglo, sino para la próxima era glacial.

Esta región de locos y entusiastas, de quijotes y eternos adolescentes, debe madurar. Es tiempo de que entendamos que nadie va a traernos un mayor desarrollo en bandeja de plata. Somos nosotros, y nadie más, los encargados de labrarlo. Es tiempo de que Latinoamérica se despoje de los ropajes de la autocompasión y aprenda el difícil arte de la autocrítica. Es tiempo de que nuestros gobiernos abandonen la propensión a ser creativos en excusas y no en soluciones, en disculpas y no en políticas concretas. Es decir, que es tiempo de que Latinoamérica reconozca, finalmente, su responsabilidad en la historia.

¿Con qué derecho se queja Latinoamérica de las desigualdades que dividen a sus pueblos, si cobra casi la mitad de sus tributos en impuestos indirectos, y la carga fiscal de algunas naciones en la región apenas alcanza el 11% del Producto Interno Bruto?

¿Con qué derecho se queja Latinoamérica de la falta de empleos de calidad, si es ella la que permite que su escolaridad promedio sea de alrededor de 8 años? ¿Con qué derecho se queja Latinoamérica de su desigualdad y de su pobreza, si ha incrementado su gasto militar a una tasa promedio de 8,5 puntos porcentuales por año desde el 2003, alcanzado la cifra censurable de casi 70 mil millones de dólares en el año 2010?

Nuestros líderes de la región bien harían en seguir el ejemplo del Presidente Obama quien, para enfrentar la crisis económica en su país, anunció la reducción de 487 mil millones de dólares en gastos del Pentágono en un plazo de 10 años. Estoy consciente, sin embargo, que a Estados Unidos aún le queda mucho por hacer para saldar su deuda pendiente con la paz y la seguridad internacionales, pues continúa siendo el mayor exportador de armas en el mundo. Es el momento de que ese país ponga los principios por encima de las utilidades de algunas corporaciones norteamericanas.

Esos datos sobre América Latina, no hacen más que demostrar la amnesia de una región que alimenta el retorno de una carrera armamentista, dirigida en muchos casos a combatir fantasmas y espejismos. Demuestra, además, la total incapacidad para establecer prioridades, una práctica que impide la concreción de una verdadera agenda para el desarrollo. El aumento de la inversión social precisa de más recursos, pero sobre todo, requiere de voluntad política y claridad en las prioridades de la inversión pública.

Por ello, en mi último gobierno, le propuse a la comunidad internacional y, muy especialmente, a los países industrializados, que diéramos vida al Consenso de Costa Rica, mediante el cual se creen mecanismos para condonar deudas y apoyar con recursos financieros internacionales a los países en vías de desarrollo que inviertan cada vez más en educación, en salud, protección al medio ambiente y en vivienda para su pueblo, y cada vez menos en armas y soldados.

Es el momento de que la comunidad financiera internacional premie no sólo a quien gasta con orden, como hasta ahora, sino a quien gasta con ética. Esta es una idea a la que aún no le ha llegado su hora, y para que le llegue, necesita del apoyo de los partidos socialdemócratas del mundo.

Amigas y amigos:

Lo que les he contado es tan sólo una ínfima parte de las grandes transformaciones y enormes desafíos políticos y económicos que el mundo enfrenta en estos momentos.

Desde empezar a dar contenido democrático a la primavera árabe, hasta lograr un nuevo acuerdo internacional en materia de cambio climático. Desde alcanzar finalmente la paz entre Palestina e Israel, hasta evitar un nuevo derramamiento de sangre en Sudán del Sur. Desde procurar un acuerdo en la eurozona para evitar la profundización de la crisis económica mundial, hasta salvar la Ronda de Doha. En estos, y muchos otros temas de la agenda mundial, están involucrados líderes y militantes socialdemócratas de todo el mundo.

La responsabilidad de nuestros partidos políticos en esos asuntos es enorme: debemos ayudar a corregir lo que hicimos mal, debemos empezar a tomar decisiones allí donde hemos permanecido inactivos, y debemos proteger lo que hasta ahora hemos hecho bien. Hoy, la esperanza del mundo tiene forma de rosa.

Agradezco que esa esperanza haya venido hasta Costa Rica, que haya venido hasta América Latina con ocasión de este Consejo de la Internacional Socialista. Aún espero un nuevo día para el mundo y para nuestra región.

Espero un futuro de grandeza para nuestros pueblos. Llegará el día en que la democracia, el desarrollo y la libertad llenarán las alforjas de nuestras naciones. Llegará el día en que cesará el recuento de las generaciones perdidas.

Puede ser el próximo año, la próxima década, el próximo siglo, o la próxima era glaciaria...Por mi parte, yo seguiré luchando. Desde mi país y desde mi partido. Sin importar las sombras, seguiré esperando la luz al final del arcoíris. Seguiré luchando hasta que llegue el día.

**DOS TEMAS QUE DEBEMOS ATENDER CON CAUTELA Y URGENCIA:
LA INGOBERNABILIDAD Y LA SEGURIDAD JURÍDICA.**

**130 Aniversario del Colegio Abogados
10 agosto de 2011**

Amigas y amigos:

Es para mí un honor ser recibido en este Colegio como un miembro más. Como un colega más. Como un amigo más. Quiero empezar agradeciendo a la Dra. Erika Hernández y a la Junta Directiva de este Colegio por invitarme a compartir con ustedes en esta mañana. En 130 años de creación, el Colegio de Abogados ha visto pasar las estaciones de nuestra vida republicana, ha visto el sol de nuestra justicia ocultarse en tiempos de turbulencia y salir en amaneceres de democracia, ha visto los brotes de la libertad reverdecer cada vez que un derecho humano se reivindica y que la ley se hace cumplir.

El Colegio de Abogados ha sido, durante más de un siglo, protagonista en la construcción del Estado costarricense; de esa casa en la que todos tenemos que caber y convivir; de esa casa en donde la que manda es la ley.

Este aniversario puede servirnos para muchas cosas. Para ver el pasado y repasar los errores cometidos; para otear el horizonte y planear las sendas del futuro; o para reflexionar hacia dónde va el país, y cómo puede el Colegio de Abogados y sus agremiados colaborar en la rectificación de su rumbo. Sobre esta última tarea es que quiero que conversemos en esta oportunidad.

El Colegio de Abogados ha sido testigo de nuestras más profundas reformas económicas y sociales. Así como este Colegio no es el mismo de hace 130 años, nuestro país tampoco lo es. Quizás en ningún otro colegio profesional, como en éste, puede sentirse con tanta fuerza el pulso de la Costa Rica del siglo XXI. De esa Costa Rica que demanda más bienes y servicios, más competitividad, más y mejores empleos, más y mejores leyes. De esa Costa Rica que demanda justicia pronta y cumplida, más seguridad ciudadana para vivir en paz, y más seguridad jurídica para trabajar e invertir.

Algunos me dirán que nada tienen que ver los jueces, los fiscales, los abogados litigantes o los magistrados, con el desarrollo costarricense. Me dirán que el oficio de la abogacía no es otro más que el de aplicar y hacer cumplir la ley en el caso concreto. En efecto, la función de muchos funcionarios judiciales es aplicar la ley, así como la de los legisladores es aprobarla y la de los miembros del Poder Ejecutivo es promover políticas públicas eficaces. Pero cada una de esas funciones específicas sirve para una función ulterior, para un propósito general, para un gran esquema que debemos ser capaces de vislumbrar. Todo lo que ustedes hacen, y todo lo que los políticos hacemos,

debe ir en razón de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ésa es nuestra principal responsabilidad.

Hoy he venido como ciudadano a hablarles de dos temas que considero cruciales y que creo que debemos atender con la mayor cautela y urgencia: la ingobernabilidad y la seguridad jurídica. Puede que algunos estén de acuerdo con mis opiniones y que otros no las compartan. A fin de cuentas, discrepar es parte de la vida en democracia.

Empecemos por la ingobernabilidad. Los gobiernos son tan imperfectos como los seres que lo componen, y por lo tanto necesitan vigilancia y control. Es claro que el Estado es indispensable, pues sigue siendo el mejor y más legítimo medio para alcanzar los grandes sueños de la humanidad, particularmente el Estado democrático. Pero necesita ser perfeccionado y repensado conforme con las exigencias de los tiempos. Necesita modernizarse.

Si hemos de dar respuesta a las demandas siempre crecientes de la ciudadanía, es indispensable que existan instituciones que puedan canalizar esas demandas, pero sobre todo que puedan propiciar los cambios necesarios para atender esas demandas. Ahí es donde estamos fallando: no basta con tener instituciones democráticas, necesitamos también que operen rápida y eficientemente.

Para nadie es un secreto que la nuestra es una democracia disfuncional. Que nuestro sistema democrático de toma de decisiones está enfermo. Una democracia es disfuncional allí donde el gobernante, del partido político que sea, está imposibilitado para ejecutar la voluntad de la mayoría. La proliferación de obstáculos a la labor presidencial, el adversar las políticas públicas simplemente porque vienen del gobierno, la exigencia al Presidente de la República de un acto de contrición cada vez que se le piden explicaciones, la crítica a toda costa por parte de la oposición política y de algunos grupos de presión, son actitudes antidemocráticas que en lugar de hacernos más libres y más democráticos, nos hacen más ingobernables.

Seguimos sin aprender que en la vida en democracia se requiere más valor para coincidir que para discrepar. Sin duda alguna la ingobernabilidad tiene causas profundas, muchas de las cuales algunos de ustedes habrán podido identificar y estudiar.

En mi opinión, el maniqueísmo político en que hemos caído y la cantidad innumerable de controles y regulaciones que entorpecen la labor del gobierno, nos tienen donde estamos ahora: envueltos en una guerra inútil de acusaciones, paralizados por el miedo a que tomar decisiones nos depare nuevos enemigos, y debatiendo sobre todo menos sobre el desarrollo y la competitividad del país.

La democracia significa, sin duda alguna, escrutinio público. Quien asume el poder, o lo ha dejado, debe estar consciente de esto. Lo que no se puede aceptar es que ese

escrutinio sea llevado hasta el punto de manchar, sin prueba alguna, el buen nombre de una persona. Nos hemos sumido en una lógica perversa, conforme con la cual primero se dicta sentencia y después se leen los cargos; primero se tira la piedra y después se comprueba si la persona tenía, en efecto, alguna culpa que mereciera castigo.

Bien convendría recordarle a los costarricenses aquella penitencia que, en el siglo XIV, San Felipe Neri imponía a los novicios culpables de difundir rumores maliciosos sobre otras personas: la de llevar una almohada de plumas a la parte alta del campanario en un día de vendaval, soltar las plumas al viento, y luego recoger todas las plumas regadas por la campiña para volverlas a poner en la almohada; tarea de antemano imposible. Los daños producidos a las honras ajenas por una acusación falsa, por un escándalo fundado en la calumnia, o por la deformación de las palabras y los hechos, son simplemente irreparables.

Los costarricenses me han escuchado decir, durante 40 años, que la honestidad no es una virtud, sino una obligación. La honestidad, uno de los valores más escasos en nuestros días, debe llevarnos a esperar de la Administración sólo lo que es racional esperar de ella, y sobre todo a reconocer sus logros al mismo tiempo que sus defectos. Es decir, debemos ser mesurados en el juicio. No podemos seguir transitando por la historia destruyendo todo lo que, por uno u otro motivo, criticamos; y sobre todo, no podemos continuar buscando unanimidad en la aprobación de las acciones gubernamentales.

Por esa vía podemos caer en el destino de otras naciones, que en su afán por buscar la perfección, prefirieron otorgar poder ilimitado a los mesías que proponían un mundo nuevo. En palabras del politólogo italiano Giovanni Sartori, “no sólo hay muchas maneras de traicionar los ideales, sino también de ser traicionado por los ideales. Una de ellas, y probablemente la más segura, es el camino del perfeccionista”.

Modernizar a Costa Rica fue una de las principales razones por las que acepté la candidatura de Liberación Nacional, por segunda vez. En mi pasada Administración fue mucho lo que pudimos hacer en esa dirección. Sin embargo, no lo pudimos hacer todo. Y no lo pudimos hacer porque en este país duramos décadas discutiendo proyectos de interés nacional; porque nos toma en promedio más de 2 años aprobar una ley; porque todo debate político termina en una trama de denuncias penales y expedientes constitucionales; y porque nuestros procesos de control, que son necesarios, son usados como excusa para impedir que el gobierno ejecute sus propuestas.

Cuando escucho a personas que critican la totalidad del programa Avancemos de mi Administración, porque unas cuantas becas presentaban irregularidades; cuando escucho a los medios de comunicación decir que porque una carretera, esperada por todos los costarricenses desde hace 40 años, ha tenido algunos problemas, toda la

obra en infraestructura de mi Gobierno está mal y hay que investigarla; no puedo evitar llegar a la conclusión de que en este país si el gobierno no hace nada, se le critica, y si hace mucho, se le crítica también mucho. Parece que lo único que importa en Costa Rica es criticar y destruir.

Creo que en mi pasada Administración despertamos proyectos nacionales de gran envergadura que dormían, como decimos popularmente, “el sueño de los justos”; que pusimos a Costa Rica a caminar de nuevo; y, lo más importante, que le devolvimos la confianza a los costarricenses. Creo que para proteger conjuntamente los intereses de los ciudadanos y del Estado, no se puede gobernar todos los días pensando en quedarle bien a la prensa, a la oposición política y a los grupos de presión. Gobernar es educar, no complacer.

Gobernar es decidir, no procrastinar. Además, gobernar es rendir cuentas. Un gobernante tiene el sagrado deber de rendir cuentas y reconocer errores, pero no es el único.

Deben rendir cuentas también los políticos de oposición, los medios de comunicación y los grupos de presión. Deben rendir cuentas por la forma en que, con muchas de sus acciones, bloquean la posibilidad de construir una Costa Rica más moderna y más competitiva.

Dirán que esa no es su intención, pero sus actitudes mezquinas están inevitablemente haciendo retroceder la democracia costarricense. Como lo he dicho en otras ocasiones, si la historia bíblica de la mujer adúltera hubiera tenido lugar en Costa Rica, la pobre mujer habría muerto apedreada, porque hay en el país demasiadas personas que se sienten dignas de tirar la primera piedra, y además esconder la mano. El desprecio por el honor ajeno no es signo de honorabilidad propia. Hasta que no comprendamos esto, el debate democrático en nuestro país seguirá estando viciado por el ensañamiento.

Quizás la muestra más palpable de ese ensañamiento y del maniqueísmo político en que hemos caído, es la frecuente creación, por parte de la Asamblea Legislativa, de comisiones para llevar a cabo investigaciones, o mejor dicho inquisiciones, que desvían la atención de lo que debe ser nuestra principal preocupación: la construcción de una Costa Rica que le resuelva los problemas y las angustias a millones de costarricenses.

El control político es importante, pero no es lo único que la Asamblea Legislativa debe hacer. Se nos olvida que la razón de ser del Poder Legislativo es legislar y dotar al país de normas claras que propicien un mayor desarrollo. Sus funciones no son las de la CIA, ni las del FBI, ni las de la KGB, ni las de Scotland Yard, ni las de la INTERPOL.

El Estado costarricense tiene definidas las funciones de cada institución. Las labores investigativas las realizan primordialmente la Contraloría, la Procuraduría, el

Ministerio Público y el OIJ. Cada vez que nuestros diputados crean una comisión para investigar hechos que otras instituciones están investigando o ya han investigado, desvirtúan el propósito fundamental de su cargo, primero porque descuidan la responsabilidad que les ha sido delegada y, segundo, porque despilfarran tiempo y dinero que nos cuesta muy caro a los costarricenses.

Las instancias de control tienen un gran papel que asumir en este escenario, porque son ellas las responsables de investigar y señalar las imperfecciones en la función pública, pero teniendo siempre el cuidado de no arruinar la cosecha por arrancar la hierba mala, de no traicionar los ideales en su afán por protegerlos.

Teniendo siempre el cuidado de distinguir entre quienes ocupan temporalmente las instituciones, y las instituciones que permanecen en el tiempo. Éste es quizás el más delicado de los balances que se debe encontrar, la línea que existe entre el ejercicio del control y el ataque; entre cuestionar a las instituciones públicas y restarles legitimidad.

Pero no basta con que las instancias de control ejerzan su función con mesura y responsabilidad. Es necesario que el Gobierno preste atención oportunamente a sus clamores, y trabaje conjuntamente con ellas.

Se trata de cómo puede hacer un Gobierno para realizar sus promesas. Cómo puede hacer un Presidente para cumplir con el programa que propuso al pueblo en su campaña. Y este no es un tema menor. El destino es esencial, pero también el camino.

No basta, como nos recuerda Séneca, con fijarnos un rumbo y que el viento nos sea favorable. Si el mar es innavegable, poco importa adónde se dirija nuestra barca: no lograremos avanzar.

Nuestro Estado se ha convertido en un Estado que privilegia el control sobre la ejecución. El nuestro es un país en donde es más fácil decir no, que decir sí, y en donde no existen consecuencias para quien obstaculiza, pero sí para quien lleva a cabo las obras de Gobierno. Hemos expandido exponencialmente las libertades, sin comprender que con los derechos vienen siempre las obligaciones. Como resultado, nadie en Costa Rica se hace responsable por sus actos.

Cuando digo que el Estado se ha convertido en un Estado que privilegia el control sobre la ejecución, no quiero decir que el control es innecesario. En una democracia el poder sólo es legítimo si es limitado.

Pero el control es poder, y debe ser, a su vez, restringido. Es muy difícil argumentar en contra del control, porque rápidamente se le tacha a cualquiera de corrupto o de autoritario. No falta también quién se pregunte por qué motivo oculto o conspiratorio alguien podría querer menos supervisión. Y en lugar de reformar nuestro sistema,

sumamos más leyes anticorrupción que son coyunturales y precipitadas, y que no hacen sino agravar el problema.

Sumado a esto, tenemos toda una fauna y flora de criterios disfrazados con el calificativo de “técnicos” y definitivamente contradictorios, que permiten que cualquier funcionario pueda encontrar argumentos para objetar una política del gobierno. Me refiero a los mandos medios, en todos los Poderes de la República, que por razones ideológicas impiden que ciertas políticas se ejecuten, que ciertos proyectos se realicen y que ciertas decisiones se acaten.

Uno no concibe en Inglaterra que un “civil servant”, o funcionario público, obstaculice la labor del gobierno porque se opone ideológicamente. En ese país, las políticas del gobierno son acatadas, independientemente de que provinieran de un gobierno conservador como el de Winston Churchill, de uno socialista como el de Clement Attlee, de uno ultraconservador como el de Margaret Thatcher, o de un gobierno socialdemócrata como el de Tony Blair.

En cambio, en Costa Rica hemos asumido como natural que sea válido, o incluso encomiable, impedirle a un gobernante que cumpla sus promesas.

Hemos permitido que el control se vuelva un objetivo en sí mismo, convirtiéndose en un obstáculo para que las cosas se hagan. Un Estado esclerótico, hipertrofiado e incapaz de ejecutar sus decisiones, vulnera tanto el interés público como un Estado que abusa de su poder.

Entre los años 1998 y 2009, la gran mayoría de los países latinoamericanos mejoraron o mantuvieron sus índices de gobernabilidad, según los indicadores que utiliza el Banco Mundial para medir esa cualidad.

Ahora bien, sólo en 3 países de América Latina la gobernabilidad se deterioró progresivamente en ese mismo periodo: Venezuela, Bolivia y Costa Rica. ¡Vaya club, estimados colegas, al que hemos ingresado!

La creciente ingobernabilidad en nuestro país es algo que advertí desde mi pasada campaña política y durante mis cuatro años de gobierno. En la medida en que sigamos siendo un país de contralores y no de emprendedores, veo muy difícil que alcancemos nuestras metas, las que sean, pero particularmente nuestra meta de convertirnos en un país desarrollado.

Esto me lleva al segundo tema del que quería hablarles: la necesidad de mejorar nuestros índices de seguridad jurídica. Si aspiramos a construir una nación más rica, el país necesita crecer económicamente a tasas mayores a las actuales. Es importante recordar que si el ingreso de nuestros habitantes crece apenas un 2% cada año, se requerirán 35 años para duplicarlo. En cambio, si crece a un 10%, como ocurre en

China y Singapur, nuestros ciudadanos verían duplicarse sus ingresos en tan sólo 7 años. Ésa es la diferencia.

Para crecer económicamente, debemos empezar por agilizar nuestra Asamblea Legislativa. Es urgente que se reforme el Reglamento Legislativo, fijando plazos perentorios para la aprobación de leyes y dándole al Poder Ejecutivo una mayor participación en la elaboración de la agenda legislativa. Es inadmisibles que nuestro Congreso tarde años en aprobar leyes que le urgen al país. La última reforma importante al Reglamento se hizo durante mi pasada Administración, y fue para darle un trámite de rápida aprobación a las leyes de implementación del TLC con Estados Unidos. Pienso que es urgente hacer otras reformas.

Con motivo del debate sobre la reducción del déficit llevado a cabo en el Congreso de los Estados Unidos, tanto los demócratas como los republicanos se pusieron de acuerdo en crear una comisión que deberá proponer, para el 23 de noviembre de este año, una nueva disminución del gasto, a fin de que las dos Cámaras del Congreso aprueben la propuesta antes de Navidad.

Estoy seguro de que si en Costa Rica establecemos una comisión similar para aprobar legislación urgente, con la incapacidad de nuestros legisladores para llegar a acuerdos, quizás esa aprobación la podamos tener el 23 de noviembre...pero del 2021, para celebrar así el bicentenario de nuestra independencia.

Necesitamos también continuar atrayendo inversión extranjera y simplificando los trámites administrativos, particularmente aquellos para instalar una empresa en el país. De acuerdo con el Doing Business Report 2011 del Banco Mundial, en términos generales nuestro país ocupa el lugar 125 de 183 economías del mundo, en cuanto a condiciones favorables para atraer inversiones extranjeras. Específicamente en el tema de facilidades para iniciar un negocio en el país ocupamos el lugar 116, entre otras cosas porque para abrir una empresa en Costa Rica se tarda 60 días, más tiempo, incluso, que el promedio en América Latina y el Caribe, que es de 56 días.

El país también ocupa la posición 129 en cuanto a la rapidez para obtener y hacer valer una resolución judicial definitiva con respecto a una controversia sobre un negocio. En total, hay que esperar 852 días para ejecutar una resolución de un tribunal, con costos legales cercanos al 25% del reclamo.

Esto no es ningún blasón de honor. No hay nada de loable en condenar a nuestros hijos a un futuro peor del que pudieron haber disfrutado. Es claro que estos atrasos en nuestro sistema judicial le generan recursos a los abogados, pero a decir verdad, preferiría que sus ingresos fueran por asesorar a las empresas nacionales y extranjeras en su labor productiva, y no en conflictos eternos en nuestros tribunales de justicia.

El país requiere también mejorar su infraestructura y necesita con urgencia una mayor inversión privada en el sector eléctrico de energías renovables.

Probablemente muchos de ustedes leyeron el titular del periódico “La Nación” del domingo pasado, que decía: “Tarifas de luz subirán a fin de año por mayor gasto en combustibles”. Eso es un hecho, no es ninguna invención. A pesar de ello, llevamos 15 meses sin poder aprobar legislación que incentive la inversión privada en la generación de energías renovables, simplemente porque un grupo de diputados se opone a esos proyectos de ley.

Es por esa razón que algunos empresarios costarricenses se fueron a invertir a otros países centroamericanos. Al final, la falta de reglas claras en el sector resultará en el encarecimiento de las tarifas para todos los costarricenses. Al respecto, siempre he pensado igual que mi buen amigo Felipe González, Ex presidente Socialista de España, cuando señala que al ciudadano no le interesa quién le preste el servicio, sino que se lo presten con eficiencia, con rapidez, que sea barato y de buena calidad.

El Estado debe otorgarles a los empresarios, nacionales y extranjeros, la certeza de que hay claridad en las reglas del juego y que, obedeciendo las leyes y cumpliendo con los requisitos, no se verán afectados en su derecho a hacer negocios.

Nuestras instituciones tienen ante sí el reto de generar una mayor seguridad jurídica, que no es otra cosa más que la protección de la confianza. Como bien dicen los ingleses, “legal security means protection of confidence”. Cada empresario que decide invertir en Panamá o en Chile, porque considera que en esas naciones las reglas son más estables y más claras, no habla muy bien de nuestro sistema democrático de toma de decisiones; cada expansión industrial o comercial que se pone en pausa mientras se espera, durante años, una resolución judicial, significan personas de carne y hueso que no pueden acceder a un trabajo, que no pueden comprar comida, que no pueden pagar sus préstamos de vivienda o de educación. Significan personas que no reciben los frutos de la democracia.

Nuestro país, tan admirado por su Estado de Derecho, por su paz, por su democracia, por su tolerancia, no puede quedarse al final de la carrera del mundo.

Amigas y amigos:

Después de tanto andar, hemos arribado a una encrucijada en la que tenemos que tomar una decisión sobre qué tipo de Estado de Derecho es el que queremos tener. Es importante que busquemos respuestas a las preguntas: ¿qué tan gobernables somos?, ¿de cuánta seguridad jurídica gozamos?, y es importante que las encontremos pronto. En una democracia como la nuestra, nuestro fin debe ser siempre el mismo: la creación de oportunidades para la realización de los individuos en libertad.

Ni el Gobierno puede asegurar ese fin sin las instancias de control, y sin la concurrencia de todas las fuerzas políticas, ni las instancias de control ni la oposición política pueden hacerlo sin el Gobierno. Es decir, que tenemos que manejar la dicotomía de ser al mismo tiempo dos fuerzas divergentes y dos fuerzas convergentes. Reconquistar el desarrollo y la justicia social, en palabras de mi amigo Gerardo Chavez Ortiz, nunca será posible cuando la mirada deja de ver al cielo, para buscar la piedrita que nos golpeó en el tobillo y devolver el golpe en la oscuridad.

De nuestra madurez, y de nuestra amplitud de miras, dependerá que tengamos éxito en obtener resultados tangibles para la población. Mientras no cambiemos de actitud y mientras no hagamos un esfuerzo aún mayor por hacer crecer el ingreso de nuestros ciudadanos, las instituciones democráticas de nuestro país seguirán estando en deuda con la población; seguirán cumpliendo únicamente con la mitad de su tarea.

En estos 130 años me antecieron en este estrado los hombres y mujeres que construyeron la Costa Rica que hoy conocemos. Aquí se han pronunciado innumerables discursos a favor de la libertad, y ninguno en defensa de la opresión; aquí se ha hablado siempre sobre cómo hacer más eficiente el Estado, y nunca sobre cómo otorgarle poderes irrestrictos.

Para nadie es un secreto que el gremio de los abogados está conformado por muchas de las mentes más brillantes que pueda tener una nación, y es necesario que esa sabiduría, esa prudencia y ese conocimiento, se pongan al servicio de las grandes obras nacionales. Abogamos, entonces, porque antes de que las manos de los abogados estén dispuestas a trabajar, sus mentes y sus corazones estén también dispuestos a colaborar.

Muchas gracias y muchas felicidades.

**LOS PARLAMENTOS DEBEN ESTAR SIEMPRE AL SERVICIO
DE LAS MEJORES CAUSAS DE LA HUMANIDAD**

**XI Asamblea General Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA)
Quebec, 7 setiembre de 2011**

Amigas y amigos:

Agradezco profundamente la invitación a estar con ustedes una vez más, como lo hice hace 14 años, durante la primera asamblea de la Confederación parlamentaria de las Américas. El honor de acompañarlos es el mismo, pero nuestra América es otra. Al comienzo de mi carrera política, hace 40 años, esta reunión hubiera sido imposible.

Un encuentro que reuniera a tantos representantes democráticamente electos, entre ellos numerosas mujeres, no habría pasado de ser una quimera, porque en aquel momento no todos nuestros pueblos gozaban del privilegio de la democracia.

No todos los seres humanos eran iguales ante sus leyes y constituciones políticas. No todos los pueblos eran libres, y muchos tampoco disfrutaban de derechos fundamentales.

Los Congresos que ustedes representan son el testimonio vivo del avance de nuestras naciones en la construcción de sus sueños democráticos. Salvo por el caso de Cuba, rige en todos los estados del Hemisferio la voluntad popular que se materializa en elecciones periódicas, pluralismo político y respeto por las libertades individuales.

Aunque a veces se nos olvida, en nuestra región han habido avances, y no son pequeños. Nuestros países deben recordar que cualesquiera que sean las carencias de nuestras Asambleas Legislativas, tener un Congreso democráticamente electo es un signo inequívoco de madurez política.

Ese es el mensaje más poderoso que hoy estamos enviando al resto del mundo: que aquí no hemos venido a ensayar la democracia, sino a evaluarla. Que aquí no hemos venido a instaurar la democracia, sino a defenderla. Que aquí no hemos venido a cuestionar la democracia, sino a mejorarla. Que la causa de la democracia nos es familiar. Que estamos convencidos de que aún la más imperfecta de las democracias, respeta más la dignidad humana que la más iluminada de las dictaduras.

La democracia es un logro fundamental de nuestro continente. Ahora sabemos que el futuro de todas nuestras naciones se escribirá en clave de democracia y de libertad, o no se escribirá. Los parlamentos son sinónimos de democracia, de paz y de respeto por la igualdad de género.

Cuando en ellos se discute y se negocia, cuando en ellos hay intercambio de ideas, se manifiesta, de forma inobjetable, la voluntad de los hombres libres. Soy un convencido de la trascendencia que los parlamentos tienen en la vida de las naciones.

En un mundo que ha rebasado las barreras de la distancia, y es cada vez más complejo y egoísta, la fuerza política y la fuerza moral de los parlamentos deben estar siempre al servicio de las mejores causas de la humanidad.

Yo fui miembro de la Asamblea Legislativa de mi país. Ahí aprendí que el parlamento es diálogo, transacción y búsqueda permanente de acuerdos, y que para ello es indispensable saber ceder y nunca sentirse poseedor exclusivo de la verdad.

Aprendí que en la lucha constante por alcanzar acuerdos es necesario escuchar al elector, al compañero de partido y al adversario. Aprendí, también, que cuando se lucha por causas que son esenciales para el fortalecimiento de la democracia y para la convivencia humana, la derrota no existe y la espera no implica ni renuncia ni claudicación de principios.

Hoy la palabra “democracia” forma parte del lenguaje común de miles de millones de personas alrededor del mundo. Y, casi sin excepción, esa palabra representa lo que es bueno, lo que es justo, lo que es esperanzador. Pero yo no soy del criterio de que las cosas buenas permanecen por inercia.

Para cuidar la democracia no sólo se requiere de participación ciudadana y libertades individuales, de elecciones libres y desarrollo humano, sino también de reflexión, de pensamiento y de autocrítica. Se requiere, sobre todo, de un permanente llamado a la racionalidad y a la cordura, algo de lo que suelen carecer nuestros parlamentos latinoamericanos.

La democracia depende tanto de lo que hagamos como de lo que dejemos de hacer. Como bien lo resume un reconocido académico en la materia: *“democracy will not persist by default”*.

Los hijos de este continente tenemos muchas razones para preguntarnos cuán profunda y sostenible es esa democracia que tanto costó alumbrar en la región.

Hoy América habla, con sana preocupación, de fortalecer sus sistemas democráticos que, con todas sus carencias y precariedades, siguen siendo infinitamente mejores que las satrapías del pasado.

Nunca debemos perder la fe de que la democracia es el único sistema de gobierno capaz de construir un mundo nuevo, digno de ser vivido. Nunca debemos perder la fe de que la democracia es el único sistema político que nos da, a todos, la posibilidad de participar activamente en la construcción de un futuro mejor.

Tenemos, entonces, la tarea de hacer que la democracia sea un logro permanente en el continente. Para ello, debemos reflexionar y actuar cuidadosamente frente a tres grandes retos: el primero, el de cómo mejorar nuestras democracias sin destruirlas, evitando tentaciones populistas y autoritarias; el segundo, el de cómo hacer nuestras democracias más eficientes, para que sean un medio idóneo para satisfacer nuestras aspiraciones de desarrollo; y el tercero, el de cómo construir democracias completas, a través de una mayor participación política de las mujeres.

Sobre estos tres grandes desafíos es que quiero hablarles hoy. Sobre el primero de esos retos, algunos dirán que no hay manera de destruir la democracia, si nuestra intención es mejorarla. Yo no estoy tan seguro de ello. Los libros de historia están llenos de héroes de la democracia, que terminaron convirtiéndose en enemigos de sus pueblos. Que terminaron confundiendo la voluntad popular con la suya propia. Que terminaron suprimiendo las libertades individuales con el único fin de perpetuarse en el poder.

El dilema que esto presenta, y que aún no hemos logrado resolver, es cómo lidiar con democracias en donde los gobernantes se comportan autoritariamente, pero no son dictaduras.

Porque, en honor a la verdad, en América sólo existe una dictadura. Los demás regímenes, nos guste o no, son democracias en mayor o menor grado de consolidación o deterioro.

Una de las grandes falacias políticas en América Latina y en muchas otras partes del mundo, consiste en vender la idea de que cada lugar puede desarrollar una democracia específica, o un sistema de libertades particular.

Muy a menudo, esas justificaciones no son más que disfraces para ocultar una vocación opresiva o autoritaria. Yo estoy plenamente convencido de que las reglas democráticas son universales y que los países son más o menos democráticos, dependiendo de cuánto se acercan o cuánto se alejan de ese sistema que esbozaron los griegos, que perfeccionaron los estadounidenses y los canadienses, que sofisticaron los nórdicos y que hoy intentamos impulsar, con mayor o menor éxito, muchos países de la Tierra.

El poder democrático es siempre un poder limitado. Por definición, un gobernante demócrata tiene oposición política, es controlado por los medios de comunicación, recibe críticas por parte de grupos de presión, es supervisado por el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tiene un periodo fijado para ejercer sus funciones, tiene un marco legal definido en el que debe operar, y se encuentra siempre sujeto al escrutinio ciudadano y a la evaluación pública de su gestión. Éstas son las reglas incuestionables

del poder democrático, y cualquiera que pretenda saltarlas incurre en vicios autoritarios, aunque haya sido elegido por el pueblo.

Algunos gobiernos en América Latina, y en otras partes del mundo, han caído en la trampa de creer que al recibir el apoyo electoral, el mandato del pueblo les permite modificar esas reglas para llevar adelante su proyecto político. Tengamos mucho cuidado. Las elecciones son una parte esencial del proceso democrático, pero no son el proceso democrático. Si un gobernante coarta las garantías individuales, si limita la libertad de expresión y si restringe injustificadamente la libertad de comercio, subvierte las bases de la democracia que lo hizo llegar al poder.

Pretender derrocar esos gobiernos, o removerlos de alguna forma violenta o contraria a la Constitución y las leyes, es caer en el mismo juego autocrático que pretendemos combatir. Si algo nos ha enseñado la dolorosa experiencia de Honduras, es que un golpe de Estado es siempre una pésima idea. La única vía para restarle poder a quienes lo han concentrado luego de recibir el apoyo popular, es minando ese apoyo popular con educación cívica, con oportunidades y con ideas.

Hace 14 años, dije ante esta Asamblea General: *“Es imprescindible educar para consolidar la democracia, para que los habitantes se conviertan en ciudadanos, para que desechemos, de una vez por todas, una ficción que venimos arrastrando desde hace dos siglos: la creencia de que es posible fundar repúblicas sin republicanos. Es necesario educar para que cada ciudadano esté en condiciones de contribuir creativamente al progreso de la sociedad de la cual forma parte. Es necesario educar para evitar que nuestros pueblos sucumban al verbo fácil de demagogos y déspotas, para que conozcan sus derechos y responsabilidades cívicas, reclamando esos derechos y cumpliendo esas responsabilidades con plena conciencia de su significado. Es necesario educar para que cada habitante de nuestras tierras no pierda en las miasmas de la ignorancia, la oportunidad de desarrollar su destino único y trascendente, axioma básico que sostiene toda la doctrina de los Derechos Humanos.”*

Lamentablemente, 14 años después, no hemos aprendido a apartar los espejismos de la demagogia y del populismo, porque el problema no son los falsos Mesías, sino los pueblos que acuden con palmas a celebrar su llegada. De nada le sirve a América Latina deshacerse de líderes con delirios autoritarios, tan sólo para ser sustituidos por nuevas estrellas del teatro político.

Esto me lleva al segundo tema del que quiero hablarles: la necesidad de hacer nuestros sistemas democráticos más eficientes, particularmente los parlamentos, para evitar que ante las necesidades insatisfechas nuestros pueblos sucumban a las falsas promesas de líderes autoritarios.

En 1997, compartí en esta misma asamblea, con los parlamentarios de entonces, las siguientes palabras: “¿cuánta pobreza soporta la democracia? La pregunta no es

retórica. El entusiasmo que saludó en nuestra América el ascenso al poder de nuevos regímenes popularmente electos, durante los años ochenta, ha ido desvaneciéndose, con pocas excepciones de manera continua y generalizada.

Nuestras democracias libran todos los días una pelea decisiva para mantenerse a flote, anegadas por descontrolados niveles de violencia social y apatía que las ponen al borde de la ingobernabilidad.”

Hoy, para contestar esta pregunta, es necesario que echemos un vistazo al pasado. América Latina no siempre fue la región que conocemos. Lo cierto es que iniciamos la carrera en iguales o mejores condiciones que otras regiones. Fuimos nosotros los que nos quedamos rezagados.

Cuando la Universidad de Harvard abrió sus puertas en Boston en 1636, y la Universidad de Laval fue fundada en esta ciudad, en Quebec, en el año 1663, había ya universidades consolidadas, y casi centenarias, en Santo Domingo, en Lima, en Ciudad de México, en Sucre, en Bogotá, en Quito, en Santiago y en Córdoba.

En 1750 el ingreso per cápita en América Latina era prácticamente similar al de los Estados Unidos, y para 1820 ya se había reducido a la mitad. Actualmente, nuestro ingreso per cápita es, aproximadamente, una quinta parte del de Estados Unidos y del de Canadá. Adquirimos nuestra independencia 100 o 150 años antes que países como Corea del Sur y Singapur, que a pesar de haber sido colonias de imperios que también se aprovecharon de ellas, y a pesar de carecer de recursos naturales considerables, hoy superan, varias veces, nuestro ingreso por habitante.

Repartir culpas y buscar enemigos es muy fácil. Lo difícil, pero también lo esencial, es reconocer nuestra propia responsabilidad en el curso de la historia. Con muy pocas excepciones, los países latinoamericanos son los que han luchado durante más años, desde el momento de su independencia, por alcanzar el umbral del mundo industrializado. Y, sin embargo, casi dos siglos después de haberse separado de España o Portugal, no existe en la actualidad una sola nación latinoamericana desarrollada.

Somos nosotros los responsables por la dirección que hemos tomado. Es cierto que hay potencias que han influido en los designios de nuestros pueblos, pero es cierto que las naciones desarrolladas también recibieron presiones hegemónicas.

No sería justo decir que solo América Latina ha tenido que enfrentar difíciles obstáculos en su camino hacia una mayor prosperidad. Pero parece que los latinoamericanos seguimos siendo alérgicos a autoconfesarnos. Nuestra región sigue siendo un muestrario de lemas nacionalistas y diatribas antiimperialistas. La victimización sigue siendo el sentimiento de mayor venta en nuestros pueblos, y

nuestros gobiernos y parlamentos siguen siendo expertos en inventar pretextos, en lugar de rendir resultados.

El precio que pagamos por la negativa a autoexaminarnos es el de una población cada vez más desilusionada de la política. No es casualidad, que en las diferentes ediciones del reconocido estudio Latinobarómetro, nuestros parlamentos sean sistemáticamente mal calificados por los ciudadanos.

Es por eso que actividades como ésta son tan importantes: porque nos da la oportunidad de evaluarnos. Porque América Latina necesita una campanada que haga despertar a quienes siguen golpeando su frente en un muro de los lamentos; un grito que ponga de pie a una región que no gasta zapatos porque está acostumbrada a andar de rodillas.

Si América Latina reconociera que ella misma es responsable por su rezago, entonces podría comprender que ella misma es capaz de escribir una historia nueva.

Lograrlo, comienza por aceptar que hay rasgos de nuestra tradición e institucionalidad que han subvertido crónicamente nuestra posibilidad de alcanzar un mayor desarrollo: la resistencia al cambio y la falta de emprendedurismo; la ingobernabilidad y la inseguridad jurídica; el proteccionismo comercial y la falta de competitividad; el descontento político y la vigencia de la tutela militar.

América Latina es la región del mundo que más se resiste al cambio. Uno podría comprender mejor la resistencia al cambio en países como Estados Unidos o Canadá, que han alcanzado envidiables niveles de desarrollo humano y que quieren seguir repitiendo una fórmula que les ha servido. Pero la resistencia al cambio en países como los latinoamericanos resulta verdaderamente sorprendente.

En muchos casos, el impulso conservador no nace de un afán por preservar el statu quo, sino de un temor a lo desconocido y, peor aún, de un desmedido interés por proteger privilegios establecidos. Vivimos bajo la consigna de que es “mejor viejo conocido que nuevo por conocer”, y nos aferramos incluso a nuestros dolores y necesidades, porque tememos perder las certezas de nuestro presente. Le apostamos a todo menos al futuro.

Si bien es natural que lo ignoto nos genere ansiedad y temor, para nadie es un secreto que en América Latina ese temor es paralizante. No sólo genera expectación, sino también catatonia. Y esto se agrava ante el hecho de que muchos de nuestros líderes políticos no han desarrollado la paciencia, y las destrezas necesarias, para acompañar a los ciudadanos en los procesos de reforma.

Recuerdo que, durante mi primer gobierno como Presidente de Costa Rica, la mayoría de los costarricenses estaba a favor de una solución militar para acabar con los conflictos bélicos en Centroamérica.

Mi tarea, entonces, fue convencerlos de que la guerra iba a significar más dolor y sufrimiento para todos, y que el único camino posible para Centroamérica era la paz. Al final, después de una larga lucha, prevaleció la solución pacífica. 20 años después, durante mi segundo gobierno, los costarricenses estaban atemorizados sobre las oportunidades que la globalización les ofrecía, manteniendo monopolios públicos obsoletos y negándose a integrarse comercialmente con el mundo.

Inicié, así, un proceso profundo de apertura de monopolios públicos y de integración comercial, estableciendo relaciones diplomáticas y comerciales con potencias mundiales. Afortunadamente, luego de un largo proceso de convencimiento, los costarricenses comprendieron la importancia que tenían esas reformas para su futuro.

Por eso muchas veces he dicho que gobernar es educar, no complacer. Gobernar es decidir, no procrastinar. Y si la educación política es importante, lo es más la educación de nuestros niños y jóvenes en nuestras escuelas, colegios y universidades. América Latina nunca podrá dar el salto al desarrollo con la cobertura y la calidad actual de su educación.

Al inicio de este año, el periódico New York Times publicó los resultados de la última evaluación PISA que realiza la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE), en la que se mide el nivel de conocimiento de los estudiantes de 15 años de 65 países en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. Se trata de la medición más reconocida de la calidad educativa en el mundo. En el área de lectura, los estudiantes de Shanghai obtuvieron el puntaje más elevado, seguidos por los de Corea del Sur, Finlandia, Hong Kong y Singapur. Estados Unidos ocupó el puesto número 17, Uruguay el 47, México el 48, Colombia el 52, Brasil el 53, y Argentina el 58. Los resultados fueron también muy similares en las áreas de matemáticas y de ciencias. En contraste, las cifras para la provincia de Quebec fueron 6, 5 y 10 respectivamente.

En esto quiero ser muy enfático: nuestras universidades no están formando los profesionales que nuestro desarrollo demanda. América Latina gradúa seis profesionales en ciencias sociales, por cada profesional en ciencias exactas y por cada dos profesionales en ingeniería.

Los científicos sociales son necesarios, pero no son tres veces más necesarios que los ingenieros. Nuestra región no podrá avanzar en el tanto su sistema educativo refleje sociedades prescritas. Visitar los campus universitarios latinoamericanos es realizar un viaje al pasado. Es devolverse a las confrontaciones ideológicas de la década de los sesenta o setenta, como si el Muro de Berlín nunca hubiera caído, y como si China y

Rusia no tuvieran hoy sistemas productivos que emulan a los de Estados Unidos, Canadá o Europa occidental.

Estamos preparando a nuestros jóvenes para una realidad que dejó de existir. En lugar de otorgarles herramientas prácticas para desenvolverse en un mundo globalizado, como las herramientas tecnológicas, idiomáticas y el apoyo a la iniciativa empresarial, muchos de nuestros centros educativos se dedican a enseñar autores que muy pocos leen y a repetir doctrinas en las que ya nadie cree. Eso debe cambiar.

Nuestras naciones deben comenzar a premiar a quienes se atreven a innovar y a crear. Deben privilegiar la iniciativa privada y reconocer el éxito personal. Deben invertir en ciencia y tecnología y reformar su oferta académica. Deben ampliar las opciones de crédito y simplificar los trámites para quienes deciden comenzar su propio negocio. Deben atraer inversión y promover la transferencia de conocimientos. Deben comprender que el pragmatismo es la nueva ideología universal, y que, como bien dijera Deng Xiaoping, *no importa si el gato es negro o si el gato es blanco, lo que importa es que cace ratones*.

Otro de los obstáculos al desarrollo de América Latina es la falta de confianza y la inseguridad jurídica. Tendemos a ignorar que el valor primordial de un mundo globalizado es la confianza.

Un talón de Aquiles de América Latina, y una de las actitudes que más urgentemente debemos cambiar en los próximos años, es que somos una región de sorpresas, en el peor sentido de la palabra. Hay países en donde los empresarios son expropiados sin ninguna justificación, en donde se revocan permisos por presión política y los casos judiciales se resuelven sin fundamento en la ley.

Es urgente, también, que reformemos nuestros aparatos estatales. La esclerosis que hasta ahora ha caracterizado a nuestros Estados es la peor trampa para nuestro desarrollo, y para la estabilidad de nuestras democracias.

Hacer más fluida la respuesta pública a las demandas ciudadanas, y aumentar los recursos de nuestros fiscos cobrándoles impuestos a las personas más ricas, es esencial para asegurar un cambio hacia una verdadera cultura de libertad. Pero no basta con aumentar los ingresos públicos. Hay que gastarlos con consciencia. Hay que establecer prioridades y hay que planificar pensando en el desarrollo humano. Y en esto América Latina tiene una deuda inmensa, no sólo porque ha gastado poco, sino también porque ha gastado mal.

La presencia de más armas, ejércitos y soldados conspira contra el desarrollo de nuestra región. Irónicamente, la reducción del gasto militar es un tema que nunca entró en la discusión sobre las mejores formas de afrontar la crisis económica internacional. Fuimos testigos de apasionados debates sobre rescates financieros y

planes de recuperación económica en diferentes parlamentos del mundo, pero nadie dijo nada de los 1630 billones de dólares que en el año 2010 el planeta destinó al gasto militar, a alimentar el vientre de los misiles y no de los niños, a pagar hordas de soldados y no de doctores. Muchas naciones recortaron, y continúan recortando, sus programas sociales a causa de la crisis internacional, pero absurdamente el gasto militar continúa en ascenso rampante.

El último tema del que quiero hablarles es la necesidad de que cada vez más mujeres se integren a la política, para hacer de nuestro continente una región más justa y verdaderamente democrática.

Si bien es cierto que el tren de la Historia ha marchado incontenible, en el pasado reciente, en la dirección de la libertad política y del derecho de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes, prácticamente no se ha movido, en cambio, para superar formas de violación a los derechos humanos mucho más añejas y arraigadas. Si es bueno recordar que una vez hubo un muro en Berlín que durante décadas impidió ejercer a millones de seres humanos el derecho de elegir su destino, es aún más importante tener claro que hoy persisten muros de miseria en cada pueblo y ciudad de los países subdesarrollados, y muros de subordinación de la mujer en muchos hogares de nuestro planeta.

Debemos ser partícipes de profundas transformaciones del destino humano, y no debemos ser indiferentes ante la suerte de los discriminados por múltiples causas. Hoy me interesa mencionar, en particular, la necesidad, la pertinencia y la urgencia de no cesar nunca en la lucha contra una forma ancestral de discriminación: la que continúa afectando a las mujeres.

Las mujeres, secundadas por un número creciente de hombres, descubren día a día nuevas formas de acción dirigidas a poner en marcha lo que podría ser la más importante revolución de la historia: el desmantelamiento de una cultura humana injusta y unilateralmente sexista. Una revolución destinada a acabar con la persistente e insidiosa explotación de la mitad de la familia humana.

Creo que no habrá paz social permanente ni democracia estable mientras no se desmantele una de las formas más perniciosas de dominación y explotación: las que ejerce un género sobre el otro.

Todos sabemos que la discriminación de la mujer se manifiesta como desigualdad en el empleo, en la atención de la salud, en el acceso a la educación y en la calidad y pertinencia de esa educación.

Desigualdad en las oportunidades económicas, políticas, laborales y salariales. Permítanme mencionar un punto más general. Nunca debemos olvidar que la violencia y la exclusión tienen un vínculo directo entre sí. La violencia que hoy asfixia

a la humanidad en todas partes, es el resultado de la negación de la diversidad, la participación y la igualdad; es el resultado de excluir sistemáticamente a muchos seres humanos de aquello que les confiere dignidad, en particular la oportunidad de decidir el propio destino y contribuir a definir el de su comunidad.

Nuestro planeta está enfermo de violencia porque está enfermo de exclusión. Por ello, la causa contra la desigualdad de la mujer, como la causa contra el racismo, como la causa contra la pobreza, como todas las causas que reivindican el elemental derecho de cada ser humano de participar en igualdad de condiciones en su sociedad, son causas esenciales para toda la humanidad: combatir la exclusión y propiciar la participación igualitaria son, finalmente, maneras de erradicar la semilla de la violencia que hoy nos abrumba.

Durante mucho tiempo he pregonado que la educación es uno de los instrumentos más eficaces en la lucha contra la desigualdad y la miseria. Pero ese esfuerzo debe orientarse de manera que favorezca principalmente a los más desprotegidos y, tiene que contemplar, prioritariamente, las necesidades educativas de la mujer. El reto no consiste sólo en educar a la mujer, sino también en educarla para su realización, y no para su sujeción.

Es valorizando a la mujer como debemos iniciar la recuperación de la humanidad de ese empobrecimiento absoluto que significa la ignorancia. Como he dicho muchas veces: si se educa a una mujer no se educa únicamente a una mujer, se educa a una familia.

La característica más hermosa y enriquecedora de la vida humana es su diversidad. Cada género, cada grupo, cada individuo se manifiesta de una manera distinta e irremplazable. Cada uno de ellos posee una porción de sensibilidad, de inteligencia y de capacidad creativa absolutamente irrepetibles y cuya eventual represión solo puede significar, para la especie humana, un empobrecimiento. El futuro del mundo será grandioso cuando la palabra “nosotros” se refiera a todo el género humano.

Amigas y amigos:

No hay que permitir que este siglo sea como el que hemos dejado atrás. Debemos dedicarnos, en cuerpo y alma, a crear un mundo con más solidaridad y menos egoísmo; con más transparencia y menos corrupción; con más educación y menos ignorancia; con más integración comercial y menos proteccionismo; con más equidad y menos injusticia.

Si bien ni la globalización, ni el crecimiento económico, ni las instituciones democráticas nos ofrecen certezas, sí nos ofrecen numerosas oportunidades que debemos aprovechar.

Nuestro destino debe ser cambiado, no como un fruto del azar sino de nuestras decisiones. Ese es el tamaño de sus tareas como representantes populares, esa es la dimensión de sus mandatos: mejorar la vida de quienes los sitúan transitoriamente en sus cargos. Ustedes son, pues, instrumentos del bien común, depositarios de los más caros valores democráticos, custodios de la tolerancia, la paciencia, el desprendimiento y la altura de miras que demanda una convivencia política civilizada.

En uno de sus aforismos, el filósofo Ludwig Wittgenstein nos advertía que “Quien sólo se adelanta a su época, será alcanzado por ella alguna vez”. Es crucial que recordemos esto. Es vital que los hijos e hijas de este Hemisferio levantemos la vista, que nos adelantemos a esta época y a la que sigue, que pensemos en grande y con verdadero sentido histórico, que proyectemos nuestras aspiraciones mucho más allá del horizonte. Si no levantamos la vista, nuestra época nos alcanzará una y otra vez, y el futuro no será otra cosa que una infinita repetición del presente.

Muchas gracias.

LAS ARMAS ESTÁN HECHAS PARA MATAR, Y PUNTO

Hoy, cuando una vez más hay naciones en guerra, cuando despreciables formas de terrorismo amenazan nuestra libertad, cuando los delincuentes organizados y comunes se arman fácilmente, América Latina debe hacer suya la causa del desarme, que es la causa de la inversión en desarrollo humano; debe hacer suya la causa del Derecho Internacional, que es la más elemental salvaguarda contra la anarquía en el mundo; debe hacer suya la causa de la paz.

Hoy nuestra libertad se encuentra de nuevo amenazada, y no serán las armas las que la protegerán. No serán las armas las que nos permitirán ponernos de acuerdo ideológicamente. No serán las armas las que repartirán pan y justicia. No serán las armas las que nos harán más libres.

Para proteger nuestra integridad y nuestros derechos serán necesarias acciones mucho más sofisticadas que jalar el gatillo de un arma, o poner un arma en las manos de cada uno de nuestros ciudadanos, para que se defiendan a sí mismos. Las nuestras son sociedades cada vez más complejas que demandan políticas nuevas y ambiciosas para garantizar la convivencia social. En esta hora, la sabiduría de nuestros pueblos no está en tomar las armas para resolver sus problemas. Estará, por el contrario, en dejarlas.

En la actualidad, hay un arma de fuego por cada diez habitantes del planeta. Eso es aberrante. Cada año, se fabrican 8 millones más, junto con 14.000 millones de unidades de munición militar, es decir, 2 balas por persona, incluidos niños y niñas. ¿Es posible, verdaderamente, argumentar en favor de un potencial destructivo de dimensiones tan apocalípticas? ¿Es posible, verdaderamente, defender una realidad por la cual puede morir el mundo entero y todavía alcanzar para una matanza idéntica?

Durante los últimos veinte años, la proporción de homicidios dolosos perpetrados con armas de fuego ha aumentado sistemáticamente en todos los países latinoamericanos. El 42% de los homicidios con arma de fuego que cada año ocurren en el mundo, tienen lugar en América Latina, donde vive menos del 10% de la población mundial.

Quien cree que duerme seguro porque ha adquirido un arma, ignora que el peligro que esa arma implica nunca duerme. Está demostrado que la proliferación de las armas de fuego entre la ciudadanía se traduce siempre en un aumento de la violencia y los crímenes. Es decir, que al adquirir armas para protegernos del peligro, estamos engendrando el peligro.

Este problema se ha agravado con el tiempo, porque las armas ya no solo llegan a los hogares, sino que también viajan en las manos de niños y jóvenes a las escuelas y colegios. Ahora llegan fácilmente a las manos de grupos terroristas que combaten

gobiernos democráticos. Ahora forman parte esencial de los activos de grupos criminales organizados y de narcotraficantes que, en el mejor de los casos igualan los arsenales estatales, y en el peor de los casos, los superan.

Contrario a lo que predicán algunos, no existe seguridad en las armas. No existe seguridad, porque las armas son mercenarios que se arrodillan ante cualquier persona, grupo o gobierno.

Debemos, también, contar con un instrumento legal que regule el tráfico de armas. Se han adoptado importantes decisiones internacionales sobre el narcotráfico, sobre la trata de personas, sobre la esclavitud, pero aún seguimos sin adoptar una decisión sobre el tráfico de armas. Sinceramente, no creo que podamos esperar más. Estamos pagando con vidas humanas la inacción de organismos constituidos precisamente para salvaguardar la paz y la seguridad internacionales.

Contar con una declaración mundial que contenga principios, reglas y procedimientos para regular el tráfico y la transferencia de armas, especialmente para evitar que las mismas terminen en manos de terroristas, delincuentes o genocidas, ha sido por décadas un deseo muy cercano a mi corazón, al de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano y al del pueblo costarricense.

Durante mi pasada Administración presenté ante la Asamblea General de Naciones Unidas el Tratado sobre la Transferencia de Armas, que se encuentra en conocimiento de esta organización, y que pretende prohibir la transferencia de armas a Estados, grupos o individuos, cuando exista razón suficiente para creer que esas armas serán empleadas para vulnerar los derechos humanos o el Derecho Internacional. Ningún Gobierno en la historia de este país ha presentado un texto de tal trascendencia internacional para disminuir la violencia y, también, para reducir la pobreza, porque está demostrado que el gasto en armas subvierte las expectativas de desarrollo de los países más pobres del planeta.

Sé que no será fácil lograr la aprobación de este Tratado. Muchos son los intereses políticos y económicos detrás del status quo en materia de producción, comercialización y tráfico de armas. Un status quo que se caracteriza, principalmente, por carecer de regulación.

Empezar a regular un sector que se autoregula es ya, por sí mismo, complicado. Por esa razón, se requerirá de toda la ayuda posible, tanto por parte de organismos no gubernamentales como de los Estados.

Estoy convencido de que las armas han sido siempre una traición, la más baja traición a la dignidad humana. Las armas están hechas para matar, y punto. No conozco otro artefacto, ni siquiera una ideología, tan contraria a nuestro propósito sobre la Tierra. No existe un solo indicio que sugiera que la carrera armamentista y el comercio de

armas han deparado al mundo un nivel superior de seguridad y un mayor disfrute de los derechos humanos. Por el contrario, no solo nos ha hecho infinitamente más vulnerables como especie, sino también más pobres.

Pero el gasto en armas no nos priva sólo de recursos económicos. Nos priva ante todo de recursos humanos. El más grande arsenal de genios en el mundo está en este momento trabajando en perfeccionar el armamento y los sistemas de defensa de algunas naciones.

Ése no es su lugar. Su lugar es en los laboratorios en donde se creen medicamentos accesibles para toda la humanidad. Su lugar es en las aulas en donde se formen los líderes del mañana. Su lugar es en los gobiernos que requieren asesoría para proteger sus cosechas, sus ciudades y sus poblaciones, de los efectos del calentamiento global.

Imaginemos, por un instante, lo que sería nuestra región si le otorgáramos más poder a los programadores y diseñadores, en lugar de a los coroneles y generales.

Si destináramos nuestros recursos a comprar más libros y computadoras, en lugar de más misiles y tanques de guerra. Si en lugar de muros y cercas alambradas, nuestras fronteras compartieran cables de alta tensión o redes de fibra óptica. Si en lugar de repetir en los colegios la historia eterna de campañas bélicas, nuestros jóvenes tuvieran la oportunidad de asistir a ferias científicas y competencias de matemática. Imaginemos esa América Latina, ansiémosla, querámosla... y subámonos las mangas de la camisa, porque nos toca a nosotros construirla.

OTRA AMÉRICA LATINA ES POSIBLE

**Citi Latin America Business Leaders Summit
Nueva York, 12 de mayo de 2011**

Amigas y amigos:

Decía el escritor estadounidense Henry David Thoreau, que el mayor halago que alguien le hizo jamás fue el de haberle preguntado qué pensaba, y haber escuchado su respuesta. El halago que hoy me han hecho al permitirme compartir mis opiniones con ustedes es grande. Pero es aún mayor cuando comparto mis opiniones en compañía de ilustres y reconocidos oradores, a quienes saludo afectuosamente.

Estoy convencido de que a este tipo de eventos venimos tanto a enseñar como a aprender. A ser a la vez maestros y estudiantes. A aportar ideas, pero también a llevarnos algunos comentarios anotados en nuestra libreta de apuntes.

Quiero agradecer especialmente a don Manuel Medina, Chairman & CEO de Citibank América Latina, por su generosa invitación. Decía Malcom S. Forbes, aquella prominente voz del mundo de los negocios, que “the best visión is insight” - “la mejor visión es la introspección”-. En mi opinión, la introspección es una de las cualidades primarias de los verdaderos visionarios, en cualquier profesión u oficio.

Difícilmente podremos conocer a los demás sin antes conocernos a nosotros mismos. Sin antes aceptar tanto nuestras virtudes como nuestras debilidades. Sin antes reconocer lo que sabemos y lo que ignoramos. Entender esto es crucial para quienes ejercen o aspiran a ejercer un puesto de gerencia en las mejores empresas del mundo, o para quienes lideran o aspiran a liderar una nación. Sólo aquellos líderes que buscan la información que necesitan o que desconocen, van un paso adelante en su búsqueda de mejores oportunidades para sus empresas y para sus países.

Me han solicitado que esta mañana les hable de América Latina. De esa región que sigue siendo un quebradero de cabeza: una región surcada por maravillas y oportunidades, pero asediada por peligros y trampas. Una región cobijada por una misma fe, articulada en torno a una misma identidad, pero dividida en torno a ideologías gastadas.

Una región que es una promesa, pero también un riesgo; una ilusión, pero también una advertencia. América Latina se encuentra, una vez más y como siempre, caminando sobre la cuerda floja del tiempo. Casi doscientos años de vida independiente no han sido suficientes para otorgarle a nuestra región la madurez necesaria para alcanzar un mayor desarrollo.

Seguimos siendo una tierra de ocurrencias, en donde la imaginación y la creatividad sirven más para escribir novelas mágicas, que para diseñar políticas públicas eficaces. Seguimos siendo una tierra en donde el populismo renace como mala hierba, abonado por la frustración de más de una tercera parte de la población que vive en la pobreza. Seguimos siendo una tierra con una débil cultura política, en donde los individuos se identifican poco con el Estado y a menudo reniegan de su condición de ciudadanos.

América Latina está sedienta de liderazgo responsable. Está sedienta de análisis científico. No estamos acostumbrados a evaluar críticamente nuestra realidad. No estamos acostumbrados a confrontar las palabras con los hechos. No estamos acostumbrados a tomar decisiones basados en la evidencia empírica. América Latina le rehúye a la autocrítica. Desaprobar aspectos de nuestros gobernantes, de nuestros Estados o de nuestros pueblos, se considera una actitud antipatriótica.

Pero yo creo que hacerse de la vista gorda ante los defectos de un país, o de una región, es cualquier cosa menos patriotismo. Es miedo, conformismo y es irresponsabilidad. Si América Latina ha de abandonar la cuerda floja, si ha de pisar tierra firme en la búsqueda de un futuro mejor, es necesario que reconozca francamente sus propios desafíos y sus propios problemas.

Uno de los grandes obstáculos para los habitantes de países desarrollados que han buscado relaciones exitosas con América Latina, particularmente los Estados Unidos, ha sido la perniciosa tendencia de ver a la región como un bloque homogéneo y uniforme, cuando en realidad se trata de una amalgama de diferencias e idiosincrasias. A decir verdad, desde un punto de vista bucólico e idealista, no existen razones personales que me impidan considerar a América Latina como una sola patria. Pero desde un punto de vista práctico y realista, asumir que se conoce a la región porque se conoce a uno o dos países latinoamericanos, no es correcto ni le conviene a nadie.

Para explicarme mejor, voy a contarles un poco sobre mi propio país, Costa Rica. Se trata de una nación cuya historia es pocas veces conocida a través de los reportes regionales. Habiendo podido tomar el camino común, Costa Rica es una excepción al lado de sus vecinos centroamericanos.

Mi país es pequeño, con tan sólo 4.5 millones de habitantes, y un territorio similar al estado de West Virginia. Es, sin embargo, un país de grandes hazañas. La nuestra es la democracia más antigua de América Latina y la primera en abolir voluntariamente su ejército hace más de 60 años.

Empezamos el proceso de integración comercial desde la década de los años ochenta, y actualmente nuestra economía es una de las más diversificadas, exportando miles de productos a cientos de países. Somos uno de los pocos países de América Latina en haber firmado tratados comerciales con la Unión Europea, China y los Estados Unidos.

También hemos construido una fuerza laboral educada y preparada, con conocimientos en tecnologías e idiomas.

Mi país cuenta con una gran estabilidad política y económica, lo que nos ha permitido que empresas como Intel, Merck, Boston Scientific, Hewlett-Packard, y Procter and Gamble escogieran a Costa Rica como su centro de operaciones.

Pero si la historia de un país pequeño como el mío es tan distinta a la de sus vecinos más cercanos en América Central, ¿cómo entonces puede ser puesto en la misma categoría que Uruguay, México, Chile o Brasil, que han hecho mejores cosas que Costa Rica, pero en algunos aspectos continúan rezagados? ¿Cómo puede el mundo ignorar el hecho de que no existe sólo una, sino muchas Latinoamérica con sus propias particularidades?

Aproximadamente hace un par de décadas, un Presidente estadounidense realizó su primer viaje a Suramérica, y a su regreso se limitó a decir: “ustedes se sorprenderían, todos son países individuales”.

Afortunadamente, poco a poco esa actitud hacia la región ha ido cambiando, al menos entre líderes mundiales y gerentes de empresas multinacionales, que se han esforzado por conocer en mayor detalle las distintas necesidades y potencialidades de nuestros países.

Hay países que necesitan de cooperación internacional para construir las instituciones democráticas más básicas, y países que, teniéndolas, requieren mejorarlas. Hay países que necesitan fomentar la competitividad de sus economías diversificadas, y otros cuyas economías se basan en la exportación de unas pocas materias primas. Hay países donde la lucha contra el narcotráfico es la tarea más urgente, y otros donde las más acuciantes amenazas son el desempleo y la inflación.

Es tiempo, por lo tanto, de adquirir un serio compromiso de respetar y reconocer los muchos matices que recorren la región, y percibir a América Latina con toda su diversidad. El icono estadounidense de los negocios, Lee Iacocca, dijo una vez que “el hombre de negocios más exitoso es aquel que se aferra a lo viejo por el tiempo que sea necesario, y toma lo nuevo tan pronto como sea mejor”. Me satisface observar que la América Latina del siglo XXI, más sofisticada en sus ambiciones y menos convulsa en sus actuaciones, puede ser ahora una nueva apuesta para los empresarios e inversionistas extranjeros.

Esto no significa que la región carezca de problemas por resolver y de retos que enfrentar en materia económica, política y social. Pero como pueden atestiguar quienes actualmente trabajan en países de América Latina, la región hoy está más integrada a la economía mundial, la democracia es “the only game in town”, y los

latinoamericanos estamos dispuestos a expandir los horizontes de nuestras aspiraciones.

Quisiera detenerme ahora a discutir tres temas que, a mi parecer, son particularmente importantes en cualquier esfuerzo que tenga como objetivo trabajar con América Latina: les hablo de nuestros desafíos democráticos; de la cooperación internacional hacia la región; y de nuestra inserción en la economía mundial.

Empecemos por los desafíos democráticos. Y empecemos por admitir que, cuando se trata de democracia, América Latina tiene todavía mucho que aprender.

Es cierto que abandonamos el yugo dictatorial hace ya veinte años, pero también es cierto que ese fue el primer paso de una caminata que aún no terminamos. Aún seguimos sin hacer las reformas necesarias para consolidar nuestras instituciones y fortalecer nuestro Estado de Derecho. Aún seguimos siendo presas del mesianismo y del populismo. Aún seguimos aplaudiendo discursos revolucionarios que son vacíos en todo menos en su amenaza a la institucionalidad. Aún seguimos rehuendo a la transparencia en el ejercicio del poder público. Aún seguimos siendo incapaces de garantizar la independencia de poderes. Aún seguimos irrespetando las reglas del juego, y haciendo del incumplimiento de las leyes un deporte nacional.

Creo que no hace falta que mencione nombres y apellidos, para comprender que en América Latina hay líderes que se han valido de los mecanismos democráticos para subvertir las bases de la democracia. Al ser electos por el pueblo, interpretan que su mandato es una patente de corso y emplean su poder no para promover el desarrollo humano de sus pueblos, sino para perseguir a la oposición, para cerrar medios de comunicación, y para buscar reformas que les permitan perpetuarse eternamente en el poder.

Han borrado las fronteras entre los tres poderes del Estado; han acomodado las normas para ajustarlas a sus planes; han limitado las garantías individuales de los habitantes, en particular la libertad de expresión. No se debe confundir el origen democrático de un régimen, con el funcionamiento democrático del Estado.

El pluralismo, la tolerancia, la crítica, son rasgos distintivos de la democracia. Cerrar medios de comunicación, censurar a los críticos, amenazar a los opositores, influenciar en los procesos judiciales contra los adversarios políticos, perpetuarse indefinidamente en el poder, son rasgos indiscutiblemente autocráticos, así vengan de un gobierno elegido por el pueblo.

Ahora bien, siendo francos, en América Latina sólo existe una dictadura, y es la dictadura cubana. Los demás regímenes, nos guste o no, son regímenes democráticos. Pero algunos tienen propensiones autoritarias. Ese es el quid del asunto: ya no se trata

de la situación que enfrentamos en la segunda mitad del siglo XX, en donde una retahíla de golpes de Estado instauraron dictaduras en la región.

Se trata, en cambio, de una escala de grises en la que algunas naciones son más democráticas que otras. Si se quieren combatir los rasgos autoritarios en la región, se debe empezar por defender a todos los gobiernos elegidos por el pueblo. Advocar la caída de regímenes como los que he mencionado, no es más que tomar bando en contra de la democracia.

Si algo nos ha enseñado la dolorosa experiencia de Honduras, es que un golpe de Estado es siempre una pésima idea. La democracia se defiende por vías más sutiles y también más legítimas. Se defiende con educación cívica, pero no sólo en nuestras escuelas, colegios y universidades, sino también en nuestras familias y comunidades. Se defiende con el diálogo permanente, con debates donde nuestros pueblos se acostumbren a pensar críticamente. Se defiende con liderazgo positivo, de parte de gobernantes capaces de transigir y negociar. Y se defiende con el ejemplo de países que han logrado gozar de los frutos de la democracia; de países que demuestren que, para alcanzar el éxito económico, político y social, no existe mejor sistema que el sistema democrático.

A los habitantes de democracias avanzadas nos corresponde dar testimonio de que la democracia sirve; que es útil para construir sociedades más justas y prósperas; que es eficaz para mejorar las condiciones de vida de los habitantes, en particular de los más pobres. Es importante entender que los pueblos latinoamericanos no eligen gobiernos populistas por afán masoquista. Los eligen porque creen en la promesa mesiánica, porque creen que construirán sociedades más desarrolladas e igualitarias.

Digo esto porque pocas oportunidades son tan propicias para el resurgimiento de demagogos con delirios autoritarios como una crisis económica. Las tentaciones autoritarias surgen con mayor facilidad ahí donde el hambre, la ignorancia y la frustración abonan el terreno para el mesianismo. Los falsos redentores de los pueblos latinoamericanos sólo pueden surgir en pueblos convencidos de su necesidad de ser redimidos, y en un continente en el que cientos de millones de personas viven con menos de \$2 dólares diarios, el Mesías suena mucho más plausible que la democracia.

Creo firmemente que la única forma para restarle poder a quienes lo han concentrado luego de ser electos, es minando ese apoyo popular con más educación y con mejores oportunidades de inversión y empleo. Si América Latina no desea volver a las trincheras de la represión, más le vale asegurar ahora mismo a todos sus ciudadanos las condiciones mínimas para una vida digna. Si nuestras naciones no hacen un esfuerzo ingente por aumentar su gasto social, particularmente su gasto en educación, nuestros ciudadanos caerán con mayor estrépito bajo el hechizo del mesianismo.

Personalmente, me siento orgulloso de que en mi segundo mandato como Presidente de Costa Rica, durante la reciente crisis financiera que tuvimos que enfrentar, presenté un plan de contingencia llamado Plan Escudo que, entre otras medidas, canalizaba más de la mitad del presupuesto al mantenimiento y fortalecimiento de los programas sociales. Sigo estando convencido de que los más pobres no tenían, ni tienen, por qué pagar por los errores y las ambiciones de los más ricos. Sigo estando convencido de que al haber evitado que más personas engrosaran las filas de la pobreza, evitamos también que más personas engrosaran las filas del descontento democrático. Sigo estando convencido de que el gasto en educación es el mejor aliado de la democracia.

Ahora bien, en este último aspecto, América Latina también está retrocediendo. Hace algunos meses se publicaron los resultados de la última evaluación del Programme for International Student Assessment, conocido como prueba PISA, que realiza la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE). En el estudio se midió el nivel de conocimiento de los estudiantes de 15 años de 65 países en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. Los estudiantes de Shanghai obtuvieron el puntaje más elevado, seguidos por los de Corea del Sur, Finlandia, Hong Kong y Singapur. Los estudiantes de América Latina, por su parte, estuvieron en el tercio más bajo. Las escuelas argentinas, que hace 100 años eran de las mejores del mundo, obtuvieron un resultado inferior al que habían obtenido diez años atrás, en una primera evaluación.

Asociado a las cifras en educación, otro dato que nos debe alertar es el poco desarrollo científico y tecnológico de la región, al menos en términos comparativos. Únicamente el 2% de la inversión mundial en investigación y desarrollo proviene de las naciones latinoamericanas y caribeñas. Sólo un país asiático, Corea del Sur, invierte más en ese mismo sector que toda América Latina y el Caribe juntos.

Mientras Corea del Sur registró 80.000 patentes en el mundo durante el año 2008, Brasil, el país de América Latina con más patentes, únicamente registró en ese mismo año 582.

Estoy consciente de que el esfuerzo por revertir esas cifras es responsabilidad exclusiva de los latinoamericanos. Que la iniciativa a cambiar debe venir de adentro, o nunca vendrá. Pero estoy convencido también de que la inversión extranjera directa y la cooperación internacional pueden hacer mucho para ayudarle a América Latina a mejorar sus índices de educación, competitividad y desarrollo humano.

A decir verdad, en un mundo globalizado como el nuestro, no podemos pretender resolver los problemas internos sin una vinculación estrecha con los demás países de la región y del mundo. Esto me lleva al segundo tema del que les quiero hablar: la cooperación internacional.

Desafortunadamente, indiferencia ha sido la respuesta más común que América

Latina ha recibido del resto del mundo, y esto es particularmente cierto para los países menos pobres y menos violentos de la región, como Costa Rica.

Indiferencia hacia aquellos países que han hecho esfuerzos colosales para crecer a tasas sostenidas, para fortalecer sus instituciones democráticas y para invertir más en educación y en la protección del medio ambiente. Se nos dice simplemente que no calificamos para recibir cooperación por no ser lo suficientemente pobres. Esto es devastador: no somos lo suficientemente pobres para recibir ayuda para el desarrollo, pero tampoco lo suficientemente ricos como para lograr un desarrollo por nuestra propia cuenta.

Necesitamos de un cambio de paradigma: que no sea el crecimiento económico el único parámetro para otorgar la cooperación internacional. Que no se castigue a quienes construyen escuelas y colegios, y que no se premie a quienes construyen cuarteles.

Por otra parte, cuando buscamos discutir los problemas que nos aquejan, somos escuchados sólo si el tema a discutir tiene implicaciones mutuas. Los Estados Unidos y Latinoamérica, por ejemplo, en las pocas ocasiones en que se reúnen lo hacen para discutir los mismos asuntos: comercio, narcotráfico e inmigración. Estos son temas cruciales y urgentes, pero no son los únicos, y mucho menos interesan a todos los países de la región en la misma medida.

Parece que los países ricos siguen sin entender que la pobreza no necesita pasaporte para viajar, y eso lo podemos ver a lo largo del muro que divide a los Estados Unidos de México. Aproximadamente cada metro de construcción de ese muro cuesta cerca de 1,500 dólares.

Haciendo una conversión, podríamos decir que con cada metro de construcción podrían comprarse computadoras portátiles del MIT Media Lab para siete niños, y podría brindarse una beca mensual de más de 100 dólares, por un año, a un estudiante pobre para que se mantenga estudiando. Si consideramos los metros completos de construcción, podrían brindarse un millón setecientos cincuenta mil de esas becas a jóvenes latinoamericanos.

Entiendo perfectamente que los flujos de cooperación hayan disminuido como producto de la crisis financiera internacional, lo que no puedo entender es que hayan aumentado los recursos dirigidos a los ejércitos, tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo.

Verdaderamente me sorprende que la reducción del gasto militar nunca fuera un tema en la discusión sobre las mejores formas de afrontar la crisis financiera. Fuimos testigos de apasionados debates sobre un rescate financiero de 700 mil millones de dólares en los Estados Unidos, y sobre un plan de recuperación económica de

aproximadamente 800 mil millones de dólares, y sin embargo nadie dijo nada de los \$1,63 trillones de dólares que en el año 2010 fueron destinados al gasto militar. En lugar de reducir ese gasto inmoral e injustificado, muchas naciones recortaron los programas sociales destinados a proteger a las personas más pobres y vulnerables.

El último tema del que quiero hablarles es de la inserción de América Latina en la economía global. Hablar de integración comercial y globalización sigue siendo difícil en buena parte de América, todavía amurallada tras las ruinas de ideologías gastadas.

Es de lo más pintoresco escuchar en nuestra región discusiones interminables sobre si deberíamos favorecer la apertura comercial. ¡Cómo si fuera una opción! La integración económica del mundo no se escoge. La integración económica del mundo se acepta. Es una fuerza, no una decisión. Da la casualidad, además, que es una fuerza provechosa.

Recientemente la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, presentó un informe que contiene los últimos datos sobre la inversión extranjera directa en la región. De acuerdo con el reporte, el crecimiento de la inversión extranjera directa el año pasado fue mayor que en cualquier otra región del mundo, aumentando en un 49% con respecto al año 2009, lo que significó que se invirtieron más de \$112,6 billones de dólares. Datos como estos son los que hacen más fácil para los latinoamericanos dejar atrás ideologías muertas y discusiones inútiles que han retrasado su crecimiento económico.

Pero el reporte también resalta las diferencias de esa inversión en Latinoamérica. Por ejemplo, mientras que en los países de América del Sur la inversión se ha centrado en la explotación, procesamiento y exportación de materias primas, en México y América Central la inversión se ha dado en diversos sectores de la manufactura, y particularmente en el sector de los servicios, siguiendo los procesos de diversificación exportadora. Estas diferencias en el tipo de inversión que se recibe tienen un impacto en el ritmo de las tasas de crecimiento.

Dada la alta demanda de materias primas en países emergentes como China, aquellas naciones que las exportan crecerán a tasas cercanas al 7%, mientras que aquellas que no las exportan crecerán a tasas cercanas al 3%.

No es momento de explicar qué conviene más, si la inversión en materias primas que brinde réditos en el corto plazo, o consolidar una plataforma diversificada que en el largo plazo brinde recursos de manera sostenida. Lo que sí es cierto es que, Independientemente del tipo de inversión que se reciba, la región necesita urgentemente mejorar las condiciones para aprovechar tanto las viejas como las nuevas inversiones.

Imaginemos, por un momento, una región en donde las normas que regulan el comercio y la producción sean claras y conocidas por todos; en donde los trámites se realicen sin demoras, y sin necesidad de pagar un soborno o hacer la misma solicitud

decenas de veces. Imaginemos una región en donde cualquier conflicto pueda ser dirimido en los tribunales, que juzgarán con celeridad e imparcialidad; en donde la seguridad ciudadana permita hacer negocios con tranquilidad; en donde la infraestructura facilite la importación y exportación de productos en tiempos récord.

Imaginemos una región en donde se respeten las leyes y los acuerdos internacionales, aplicando estándares universales que faculten el comercio entre países con distintas legislaciones. Yo me pregunto: ¿no es esa región que imaginamos la región que deseamos tener? ¿No es esa la región que podría permitirle a América Latina crecer y prosperar más? Lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir: de nada le sirve a América Latina profundizar su integración comercial o atraer mayores flujos de inversión, si no aumenta sensiblemente su competitividad.

Esto es, que nuestras naciones deben invertir en innovación; deben enseñarles a sus niños y jóvenes computación e idiomas; deben fortalecer el imperio de la ley; deben combatir el crimen organizado y el narcotráfico; deben construir mejor y nueva infraestructura; deben reformar sus sistemas tributarios, pues actualmente la carga tributaria en la región es, en promedio, un 18% del Producto Interno Bruto; deben agilizar sus burocracias; deben modernizar sus regímenes laborales; y deben fomentar el emprendedurismo, si es que quieren cruzar el umbral del desarrollo que por tanto tiempo han cortejado.

Para sentarse a comer al banquete de la prosperidad, las naciones latinoamericanas deben vestirse primero para la ocasión. Si bien creo que los latinoamericanos lo tenemos todo para sentarnos en ese banquete, desafortunadamente, una vez más, llegaremos tarde. Los ojos del mundo, incluidos los de Europa y los Estados Unidos, miran ahora hacia el Este. Como bien lo resume una frase en inglés: “there was the rise of the West, now the rise of the rest”; “primero fue el auge del Oeste, ahora es el auge del resto”; particularmente el auge de los asiáticos. El crecimiento asombroso de los países asiáticos debe ser un incentivo para fortalecer las débiles alianzas que tenemos. Esfuerzos como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, los Estados Unidos y la República Dominicana, los tratados de libre comercio de los Estados Unidos con Panamá, Perú y Colombia, y el Acuerdo de Asociación entre América Central y la Unión Europea - el primero en ser negociado enteramente entre dos regiones -, expandirán más nuestras fronteras y unirán a nuestros países a través del comercio, en un momento en el que la integración comercial con el mundo es un prerrequisito esencial para el desarrollo.

Sin embargo, sabemos muy bien que el haber completado esos tratados es tan sólo una excepción en las prioridades de Europa y de los Estados Unidos. Esto no es ninguna queja, sino tan sólo el reconocimiento de una verdad que todos conocemos. Aún queda mucho por hacer si queremos convertirnos en socios estratégicos; en algo más que amigos de viaje. Porque al final estamos juntos en esta hazaña por el desarrollo.

Cuando se trata de los Estados Unidos y América Latina, no somos más adversarios, ni tampoco simples vecinos, sino aliados en un nuevo orden mundial que nos exige esfuerzos conjuntos. América Latina ha sido por mucho tiempo la eterna inquilina en la antesala del progreso, y por eso me alegra que se esté aliando con sus socios comerciales para cruzar, finalmente, el umbral de la prosperidad.

Hacerlo requerirá valentía y coraje. Pero requerirá, sobre todo, de que aumentemos la cooperación internacional y la integración comercial.

Amigas y amigos:

Mi fe inquebrantable en el destino superior de América Latina es hoy mayor. Aún queda mucho por hacer, pero lo más importante ya lo hicimos: enterrar el pasado. Las naciones latinoamericanas ahora miran al futuro con optimismo y esperanza, algo impensable hace algunas décadas en medio del dolor y el sufrimiento que las guerras y las dictaduras infligieron en millones de corazones con hambre de pan y sed de libertad.

Me asombran los cambios que todos los países de América Latina han experimentado recientemente, y la velocidad con que se van acercando a sus sueños. La mayor motivación que podemos encontrar para seguir trabajando por este continente es reconocer que no es el mismo de hace 20, 10, y ni siquiera, 5 años atrás. Aún existe la posibilidad de que el desarrollo se asiente para siempre en nuestra tierra. Aún existe la posibilidad de que los caminos a la posteridad se devuelvan, y empecemos a recorrer de una vez por todas los caminos a la prosperidad. Aún existe la posibilidad de que seamos internacionalmente reconocidos, tanto por nuestros logros como por nuestras riquezas.

Espero que mis palabras les hayan dejado, al menos, una luz diminuta en la oscuridad, una luz parpadeante que recuerde que otra América Latina es posible. Nuestro continente no es más el loco desvarío que avistaron los trotamundos que acompañaban a Cristóbal Colón en sus viajes marinos, sino una región mejor. Una región que podemos construir a fuerza de voluntad, trabajo y sentimiento. Una región en donde no le tenemos miedo al cambio ni a pensar en grande. Decía el gran escritor mexicano Octavio Paz, que “América no es tanto una tradición que continuar como un futuro que realizar”. Ese futuro está hoy más cerca que nunca.

El tramo que nos falta para alcanzarlo es aún largo, pero se trata, a fin de cuentas, de un tramo más. Sólo nos resta apurar el paso.

Muchas gracias.